

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA: septiembre 26 del 2024
	Página 1 de 51
AUTO No. 612 IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2019-00730	
TRAZABILIDAD	2016-GC-085
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	PRF-2019-00730
SIREF	AC-80762-2018-24872
ENTIDAD ESTATAL AFECTADA	DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
PRESUNTOS RESPONSABLES	<p>BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014.</p> <p>YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos.</p> <p>SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, designada para la Supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014.</p> <p>INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “INSTEP”, identificado con NIT. 835.001.684-1, representado legalmente por Elizabeth Riascos Riascos, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.777.019, Contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014.</p> <p>CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, identificado con NIT. 31.589.962-1, representado legalmente por Paola Andrea Molina Angulo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, para que preste los Servicios Educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014.</p>
CUANTÍA	UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000) sin indexar.
TERCERO CIVILMENTE RESONSABLE	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS , identificada con NIT. 860.002.400-2. Póliza Global Sector Oficial No. 300010, Riesgo 1. Objeto del Seguro: Manejo, expedida el 27 de enero de 2014 con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero del 2015.
DIRECTIVO PONENTE	GUILLERMO ELIÉCER LÓPEZ PERDOMO

ASUNTO

Los suscritos Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 268 y 271 de la Constitución Política de 1991, la Ley 610 de 2000, en concordancia con la Resolución 6541 de 2012 modificada por la Resolución 748 de 2020 de la Contraloría General de la República, habiéndose agotado la actuación prevista de la Ley 610 de 2000 y estando en la oportunidad para proferir la decisión señalada en el artículo 46 ibidem, procede la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 2 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

Cauca de la Contraloría General de la República, conforme al artículo 48 a proferir Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal dentro del trámite del presente Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, el cual se adelanta por el manejo irregular de recursos públicos en el DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.

ANTECEDENTE

En oficio No. 2019IE0020572 del 6 de marzo de 2019, la Contralora Provincial, Directiva Ponente, recomienda apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal, con ocasión de los hechos irregulares que presuntamente afectaron el patrimonio del Distrito Especial de Buenaventura. En Auto No. 510 del 20 de agosto de 2019, las Directivas de la Gerencia Colegiada del Valle del Cauca, ordenan la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Funge como Directivo Ponente el provincial GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO. En radicado No. 2019IE0034010 del 12 de abril de 2019, se asignó a la profesional ADRIANA FRANCO LONDOÑO, para que sustancie la presente actuación; mediante Auto No. 628 del 16 de septiembre de 2021 se reasigna al profesional DIEGO FERNANDO LENIS TRUJILLO; en oficio con radicado No. 2021IE0106976 del 9 de diciembre de 2021, se designó a la profesional PRISCILA CENEIDA ALEGRÍA ALEGRÍA , para continuar con la sustanciación de los asuntos donde ejercía como sustanciador el profesional DIEGO FERNANDO LENIS TRUJILLO, consideración que se encuentra en el Auto No. 13 del 19 de enero de 2022. Mediante radicado No. 2024IE0021183 del 22 de febrero de 2024 se reasigna a la profesional SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA, para la sustanciación de dicho proceso, designación decretada en el Auto No. 114 del 28 de febrero de 2024.

COMPETENCIA

El Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, establece que corresponde a la Contraloría General de la Republica el control fiscal de los recursos de la nación, mientras que el Artículo 268 en su numeral 5 del mismo ordenamiento, determina que el Contralor General de la Republica tendrá entre otras funciones la de: *"establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma"*.

El desarrollo del marco constitucional sobre el control fiscal, se evidencia en varias normas legales y reglamentarias, como es el caso de la Ley 610 de 2000, que aborda el tema del Proceso de Responsabilidad fiscal, esencialmente en el citado Artículo 40.

Bajo este entendido, en virtud de la Resolución No. 6541 de 2012, corresponde a las Gerencias Departamentales Colegiadas:

"Capítulo VII

Distribución de Competencias para el Proceso de Responsabilidad Fiscal Artículo 24. El Proceso de Responsabilidad Fiscal ordinario que trata la Ley 610 de 2000 con las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011 y el Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal establecido por la Ley 1474 de 2011 se adelantara en el nivel desconcentrado de conformidad con las siguientes reglas de competencia:

- 1. Gerencias Departamentales Colegiadas. Les corresponde conocer y decidir:
 - a. En única instancia según corresponda, de los procesos de responsabilidad fiscal respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por el nivel desconcentrado de las entidades del orden nacional y respecto de los recursos del orden nacional que se

hayan ejecutado o debieron ejecutarse por parte de las entidades del orden territorial y descentralizada por servicios.

- b. En única o primera instancia, de los procesos de responsabilidad fiscal que les sean asignados en virtud del control fiscal posterior excepcional.*
(...)

Artículo 25. Sustanciación de las Decisiones en el Proceso de Responsabilidad Fiscal en el Nivel Desconcentrado. *El conocimiento, trámite y decisión de los procesos de responsabilidad fiscal será competencia de los Directivos Colegiados de la Gerencia Departamental Colegiadas quienes tendrán la dirección integral de los mismos.*

El funcionario sustanciador impulsará los procesos de responsabilidad fiscal y proyectará los autos y fallos, siguiendo los lineamientos trazados por el funcionario que dirige la actuación, bajo la coordinación del funcionario designado para ello.

"Dichos autos los suscribe el funcionario de conocimiento o la colegiatura según el caso, pero la sustanciación y revisión de las decisiones se acreditará con la firma de los funcionarios que desempeñaron esos roles".

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es una entidad territorial, dotada de un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente, y su patrimonio corresponde a los recursos transferidos por mandato de los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001, situación que lo hace sujeto de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental del Valle del Cauca.

Los pagos dentro del programa de ampliación de cobertura educativa, vigencia 2014, realizados por la Alcaldía Distrital de Buenaventura al Instituto Tecnológico Panamericano-INSTEP, quien a su vez contrato con el Centro Educativo Abeja Maya, se encuentran soportados presupuestalmente en los dineros asignados por la Secretaría de Educación Distrital cuyos recursos provienen del Sistema General de Participaciones—SGP, por lo tanto, es la Gerencia Departamental del Valle del Cauca competente para adelantar la presente investigación de carácter fiscal.

HECHOS

La Administración Distrital de Buenaventura - Valle del Cauca, durante la vigencia 2014, efectuó la asignación de recursos para cobertura educativa, destinados a la celebración de acuerdos de voluntades con las instituciones educativas de carácter privado, recursos que fueron objeto de análisis y verificación; en consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional - MEN, adelantó interventoría a la matrícula contratada para el año 2014, por la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Buenaventura, a través de la firma interventora C&M Consultores S.A., con el fin de verificar la prestación del servicio educativo en los cupos asignados, estableciendo la existencia de estudiantes ficticios, que excedieron la matrícula para dicha vigencia, la cual se elaboró con base en las actas de visitas de campo suscritas por los auditores y los rectores de cada una de las instituciones educativas distritales, quedando plasmadas en el archivo *INEXISTENTES CONTRATADA DEPURADO-BASE AUDITORIA MEN 2014-SOPORTADA EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION*, que contiene la base de datos de los alumnos inexistentes detectados en la matrícula del Distrito.

Para el caso en concreto, se firmó el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, entre la Secretaría de Educación de Buenaventura y el Instituto Tecnológico Panamericano – INSTEP, el cual tenía como objeto *“LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO – INSTEP PARA LA ATENCION DE 1.402 ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA, CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN EL BANCO DE OFERENTES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, PARA LA VIGENCIA LECTIVA*

2024”, contrato que tuvo un valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.261.800.000); el INSTEP a su vez realiza el Convenio No. 011-14 con varias subsedes entre ellas el Centro Educativo Abeja Maya cuyo objetivo era “GARANTIZAR ENTRE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA SECUENCIA PARA QUE LOS EDUCANDOS SUBSIDIADOS POR EL PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, PUEDAN CURSAR LA TOTALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, EDUCACION BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA, EDUCACION MEDIA TECNICA Y DE FORMACION LABORAL; SIN INTERRUPCIONES, LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE CADA NIÑO ATENDIDO EN EL AULA DE CLASES POR LA SUB-SEDE”, convenio que tuvo un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$39.600.000), la Institución atendió a cuarenta y cuatro (44) de los estudiantes materia de esta investigación, durante el año lectivo 2014.

La Administración Distrital de Buenaventura, tiene la responsabilidad de ejercer, para todos los Contratos que perfeccione y desarrolle, una correcta y adecuada vigilancia, seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero.

De acuerdo con lo anterior se adelanta la Indagación Preliminar ANT-IP-2017-00352, donde a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura como la Fundación Comunitaria Despertar, se procedió al acopio de la ficha técnica de los estudiantes presuntamente inexistentes de la vigencia 2014, ficha que agrupaba los siguientes documentos:

- 1) Fotocopia del documento de identidad
- 2) Registros de calificaciones o boletín individual de desempeño
- 3) Certificación del Rector sobre la matrícula de los estudiantes
- 4) Comprobantes de Egreso
- 5) Certificado de disponibilidad presupuestal
- 6) Registro presupuestal.

En oficio No. 2018EE0093160 del 6 de agosto de 2018, se solicita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura la información pertinente, quien mediante oficio No. 2018ER0101520 del 1 de octubre de 2018, suscrito por el Secretario de Educación Distrital, remite los expedientes contractuales de ampliación de cobertura educativa vigencia 2014, donde se informa que no se prestó el servicio educativo a la totalidad de los cupos asignados y efectivamente pagados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Contraloría General de la Republica es competente para conocer de estos hechos en los cuales existe un presunto detrimento patrimonial, con base en las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

- 1. **La Constitución Política** le otorgó a este ente de control la función pública del control fiscal, al señalar en su Artículo 119 que *"La vigilancia de la gestión fiscal, control de resultados de la administración y el ejercicio del control fiscal, corresponde a la Contraloría General de la República, en el Artículo 267 que "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación..."*, señalando en el Numeral 5 del Artículo 268 ibidem, como una de sus atribuciones, *"establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma"*.
- 2. En desarrollo del mandato constitucional antes expuesto, se expidió, entre otras, **la Ley 610 del 18 de agosto de 2000** que consagra el proceso de responsabilidad fiscal, mediante el cual se establece su trámite, con la que se

- precisan los aspectos generales y se define, entre otros, el proceso de responsabilidad fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción y omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial del Estado.
- El Artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000**, que consagra que la Contraloría General de la República atribuye la gestión fiscal del Estado mediante un control financiero, de gestión y resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
 - El Artículo 58 del Decreto Ley 267, numeral 4**, según el cual corresponde a la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, dirigir los procesos de responsabilidad fiscal como producto de la vigilancia fiscal.
 - La Resolución Orgánica No. 6541 del 18 de abril de 2012**, determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, en cuyo Artículo 28, asigna competencia a la Gerencia Departamental Colegiada para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal aplicables para su respectivo territorio.
 - Los Artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993**, que define el control fiscal y los valores que fundamentan su vigilancia, como: La eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
 - Y los Artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 40 de la Ley 610 de 2000**, que establecen los principios orientadores de la acción fiscal, la definición de gestión fiscal, objeto y elementos de la responsabilidad fiscal y daño patrimonial al Estado.
 - Ley 1474 de 2011**, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Subsección II, Artículos 106 al 109 y Subsección III del Artículo 110 al 120. (Modificaciones a la regulación y disposiciones comunes al procedimiento ordinario y verbal de responsabilidad fiscal).

Para la supervisión e interventoría: Ley 1474 de 2011 en su Artículo 84: **Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores**. *La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.*

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Parágrafo 1. El Numeral 34 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, Artículo 8, Numeral 1, con el siguiente literal:
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante

relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. **Parágrafo 3.** El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo comine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. **Parágrafo 4.** Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA

ENTIDAD	DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
NIT	890.399.045-3
Representante legal	BARTOLO VALENCIA RAMOS
Dirección	Calle 2 Carrera 3, Edificio CAD, Centro
Teléfono	602 224 05 40
Página web	www.buenaventura.qov.co

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es una entidad pública administrativa territorial del orden municipal, con personería jurídica, dotada de un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente, régimen especial, cuyas funciones están establecidas en la Constitución Política, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, en la Ley 136 de 1994 y demás normas que rigen para el Distrito, su patrimonio corresponde a los recursos transferidos por mandato de los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES

Fueron vinculados en calidad de presuntos responsables fiscales al presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal, las siguientes personas:

1. BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014
2. YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014.
3. SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014.
4. INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “INSTEP”, identificado con el Nit. No. 835.001.684-1, representado legalmente por Elizabeth Riascos Riascos, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.777.019, Contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, quien a su vez realiza el Convenio No. 011-14 con la institución privada, CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, identificado con NIT. 31.589.962-1, representado legalmente por Paola Andrea Molina Angulo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, para que preste los Servicios Educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014.

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, fue vinculada en calidad de Tercero Civilmente Responsable Fiscal al presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la aseguradora **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al expedir una renovación del Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial No. 300010, Riesgo 1. Objeto del Seguro: Manejo, expedida el 27 de enero de 2014 con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero del 2015, tomador Distrito Especial de Buenaventura, identificado con el Nit. No. 890.399.045-3, asegurado Bartolo Valencia Ramos identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, por el riesgo amparado: Fallo con Responsabilidad Fiscal, por un valor asegurado de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000). Comunicada al Representante Legal de la aseguradora mediante Oficio No. 2019EE0104705 del 26 de agosto del 2019.

ACTUACIONES PROCESALES

Una carpeta física del traslado de hallazgo con treinta (30) folios, así:

- Oficio por medio del cual se recomienda apertura de PRF dentro de la Indagación Preliminar No. ANT_IP-2017-00352-2016-GC-085 con soportes y con 26 folios, del 1 al 26, 4 DVD en la Carpeta principal 1/3.
- Respuesta oficio No. 2019EE0007187 de parte de la Secretaria de Educación de Buenaventura, con 2 folios, el 27-28, 1 DVD en la Carpeta principal 1/3.
- Oficio traslado documentos Denuncia No. 2019-153706-80764-D, para Antecedente No. 216-GC-085 con soportes y con 2 folios, el 29-30, 1 DVD Carpeta principal 1/3.

Tres carpetas con el siguiente contenido:

1. Auto 510 del 20 de agosto de 2019 Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, folios 31 al 39:
 - ✓ Oficio No. 2019IE0073690 del 22 de agosto de 2019, solicitud de notificación personal a los presuntos. Folio 40.
 - ✓ Oficio No. 2019EE0104705 del 26 de agosto de 2019, comunica vinculación al Representante Legal de la Compañía Aseguradora La Previsora Seguros Folio 41.
 - ✓ Oficio No. 2019EE0105142 del 27 de agosto de 2019, se comunica apertura y se solicita información al Representante Legal del Distrito Especial de Buenaventura Folio 42.
 - ✓ Oficio No. 2019EE0105157 del 27 de agosto de 2019, se comunica apertura y se solicita información al Representante Legal del Centro Educativo Abeja Maya. Folio 43
 - ✓ Oficio No. 2019IE0085107 del 24 de septiembre de 2019, cumplimiento a las diligencias de notificación del Auto 510 del 20 de agosto de 2019 Apertura del Proceso. Folio 51.
 - ✓ BARTOLO VALENCIA RAMOS, oficio No. 2019EE00103659 del 23 de agosto de 2019, citación para notificación personal. Folios 52-53. Notificado por Aviso No. 166-2019 del 3 de septiembre de 2019. Folio 54-56. Segunda notificación por cambio de dirección, por Aviso No. 014-2024 del 22 de mayo de 2024. Folio 479 al 485.
 - ✓ Oficio No. 2019IE0074957 del 27 de septiembre de 2019, se solicita profesional especializado. Folio 44.
 - ✓ SONIA SEGURA, Radicado No. 2023IE0100859 del 28 septiembre de 2023 autoriza Notificación personal electrónica. Folio 220. Se notifica de manera personal electrónica, radicado No. 2026EE151514 del 7 septiembre de 2023. Folio 241-243.

- ✓ YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, oficio No. 2019EE00103661 del 23 de agosto de 2019, citación para notificación personal No. 079-2019. Folios 62-66. Acta de notificación personal No. 126-2019 del 23 de septiembre de 2019. Folio 67.
 - ✓ INSTITUTO TECNOLÓGICO PANAMERICANO “INSTEP”, notificado por Aviso No. 263 del 18 de septiembre de 2023. Folios 224-226.
 - ✓ CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, oficio No. 2019EE00103660 del 23 de agosto de 2019, citación para notificación personal. Folios 57-58. Notificado por Aviso No. 078-2019 del 23 de agosto de 2019; Aviso de notificación No. 167-2019 al representante legal del 3 de septiembre de 2019. Folios 59-61.
 - ✓ Oficio No. 2019ER0114448 del 17 de octubre de 2019, por medio del cual, se reasume poder por la aseguradora Solidaria S.A. Folio 68-71.
 - ✓ Oficio No. 2019IE0065247 del 16 de octubre de 2020, por medio del cual, se solicita profesional especializado. Folio 107.
 - ✓ Acta de asistencia fechada el 14 de mayo de 2024, se rinde versión de los hechos por parte del Director del INSTEP, Segundo Edgar Angulo. Folio 436.
 - ✓ Acta de no comparecencia fechada el 14 de mayo de 2024, de Sonia Segura Sánchez. Folio 437.
 - ✓ Acta de no comparecencia fechada el 20 de mayo de 2024, de Bartolo Valencia Ramos. Folio 472.
2. Resolución Reglamentaria REG EJE-0063 del 16 de marzo de 2020, suspensión de términos, folios 73-74.
3. Resolución Reglamentaria REG-EJE-0064 de 30 de marzo de 2020, por medio de la cual se suspenden términos, folios 75-77.
4. Resolución Reglamentaria REG-EJE-0070 de 01 de julio de 2020, por medio de la cual se suspenden términos, folios 78-80.
5. Auto No. 253 del 14 de julio de 2020, avoca conocimiento de PRF y se reasignan ponencias. Folios 81-90.
- ✓ Notificado por Estado No. 047-2020 del 15 de julio de 2020. Folios 101-105.
6. Auto No. 299 del 14 de julio de 2020, ordenan suspensión de términos. Folios 91-100.
- ✓ Notificado por Estado No. 049-2020 del 21 de julio de 2020. Folio 106.
7. Auto No. 507 del 23 de octubre de 2020, reanudan términos en PRF. Folio 108-130.
- ✓ Notificado por Estado No. 103-2020 del 28 de octubre de 2020. Folio 132.
8. Auto No. 552 del 11 de noviembre de 2020, designa profesional especializado. Folios 133-135.
- ✓ Notificado por Estado No. 110-2020 del 17 de noviembre de 2020. Folio 138.
 - ✓ Acta de posesión de profesional especializado del 24 noviembre de 2020. Folio 140.
9. Auto No. 628 del 16 de septiembre de 2021, avoca conocimiento de PRF y se reasigna sustanciador. Folios 141-152.
- ✓ Notificado por Estado No. 167-2021 del 20 de octubre de 2021. Folio 154-155.
10. Resolución Reglamentaria REG-EJE-0107-2022 del 6 de abril de 2022, por medio de la cual se suspenden términos. Folios 166-167.
11. Auto No. 013 del 19 de enero de 2022, reasigna procesos ordinarios de responsabilidad civil. Folios 163-164.









- ✓ Notificado por Estado No. 009-2022 del 20 de enero de 2022. Folio 165.
- 12. Auto No. 862 del 9 de diciembre de 2022, decreta practica de pruebas dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil. Folios 170-172.
 - ✓ Notificado por Estado No. 204-2022 del 15 de diciembre de 2022. Folio 174.
- 13. Resolución Reglamentaria REG-EJE-0119-2022 del 22 de diciembre de 2022, por medio de la cual se suspenden términos. Folio 177.
- 14. Resolución Reglamentaria REG-EJE-0123-2023 del 28 de marzo de 2023, por medio de la cual se suspenden términos. Folios 178-179.
- 15. Auto No. 265 del 17 de abril de 2023, avoca conocimiento en proceso ordinario de responsabilidad civil. Folio 180.
 - ✓ Notificado por Estado No. 057-2023 del 18 de abril de 2023.
- 16. Auto No. 530 del 9 de agosto de 2023, designa profesional para rendir informe técnico. Folios, del 198 al 199.
 - ✓ Notificado por Estado No. 129-2023 del 11 de agosto de 2023. Folio 201.
 - ✓ Oficio No. 2023IE0131343 del 15 de diciembre del 2023, Remisión de informe técnico rendido por el ingeniero Edwar Colorado. Folios 331-335.
 - ✓ Fijación en lista No. 120 del 18 de diciembre de 2023. Folio 347
- 17. Auto No. 555 del 16 de agosto de 2023, decreta pruebas y se reconoce personería para actuar. Folios, del 206 al 211.
 - ✓ Notificado por Estado No. 133-2023 del 17 de agosto de 2023. Folio 213.
- 18. Auto No. 530 del 9 de agosto de 2023, designa profesional para rendir informe técnico. Folio 198-199.
 - ✓ Notificado por Estado No. 129-2023 del 11 de agosto de 2023. Folio 201.
- 19. Auto No. 555 del 16 de agosto de 2023, vincula presuntos responsables, decretan pruebas y se reconoce personería para actuar. Folios 206-211.
 - ✓ Notificado por Estado No. 133-2023 del 17 de agosto de 2023. Folio 213.
- 20. Auto No. 114 del 28 de febrero de 2024, designa profesional para la sustanciación. Folios 341 al 342.
 - ✓ Notificado por Estado No. 037-2024 del 1 de marzo de 2024.
- 21. Auto No. 123 del 29 de febrero de 2024, decreta pruebas. Folios 344 al 346.
 - ✓ Notificado por estado No. 037-2024 del 1 de marzo de 2024.
 - ✓ Radicado No. 2024EE0067637 del 12 abril de 2024 comunicación del auto 123 del 29 de febrero al C. E. Abeja Maya. Folios 417.
 - ✓ Radicado No. 2024EE0067638 del 12 abril de 2024 comunicación de los autos 122 y 123 del 29 de febrero a la alcaldía distrital de Buenaventura. Folios 418-420.
 - ✓ Acta de visita fiscal especial a la Alcaldía Distrital de Buenaventura y a la Secretaria Distrital de educación de Buenaventura. Folios 421-425.
 - ✓ Oficio No. 2023IE0049225 del 7 de mayo del 2024, Remisión de informe técnico rendido por el ingeniero Edwar Colorado. Folios 426-429.
 - ✓ Oficio No. 2023IE0056339 del 26 de mayo del 2024, Remisión de complemento de informe técnico rendido por el ingeniero Edwar Colorado. Folios 476-748.
- 22. Auto No. 351 del 20 de junio de 2024, designa apoderados de oficio. Folios 486 al 488.

- ✓ Notificación por Estado No. 100-2024 del 21 de junio de 2024. Folios del 490 al 491.
23. Auto No. 425 del 19 de julio de 2024, por medio del cual se pone a disposición informe técnico, Folios 504 al 505.
- ✓ Notificado por Estado No. 118-2024 del 22 de julio de 2024. Folios 507 al 509.
 - ✓ Fijación en Lista No. 044 del 23 de julio de 2024. Folios 510 al 512.
24. Auto No. 351 del 20 de junio de 2024, designa apoderado de oficio. Folios 487-488.
- ✓ Notificado por estado No. 100-2024 del 21 de junio de 2024. Folio 490.
 - ✓ Créditos del estudiante Miguel Ángel Carabali Márquez, para actuar como apoderado de oficio. Folios 352-353.
 - ✓ Acta de posesión radicado 2024EE0116802 del 24 de junio de 2024 y créditos. Folios 499-503.
 - ✓ Créditos del estudiante Juan Esteban Calderón Ruano, para actuar como apoderada de oficio. Folios 438-440.
 - ✓ Acta de posesión radicado No. 2024EE0116790 del 24 de junio de 2024. Folios 493-494.
25. Auto No. 528 del 30 de agosto de 2024, designa apoderado de oficio. Folios 519-521.
- ✓ Oficio No. 2024EE0160045 del 26 de agosto de 2024, solicitud de apoderados de oficio. Folio 515.
 - ✓ Notificado por estado No. 144-2024 del 2 de septiembre de 2024. Folios 524-525.
 - ✓ Créditos de la estudiante Laura Catalina Andrade Correa, para actuar como apoderado de oficio. Folios 515-518.
 - ✓ Acta de posesión radicado No. 2024EE0164729 del 30 de agosto de 2024. Folio 523.
26. Auto No. 542 del 3 de septiembre de 2024, Decreta medidas cautelares. Folios 528-531.
- ✓ Notificado por estado No. 155-2024 del 17 de septiembre de 2024. Folio 533.
27. Auto No. 596 del 20 de septiembre de 2024, designa apoderado de oficio. Folios 539-541.
- ✓ Notificado por estado No. 159-2024 del 23 de septiembre de 2024. Folio 544.
 - ✓ Créditos del estudiante Llerly Asneily Noguera Burbano, para actuar como apoderado de oficio. Folios 536-538.
 - ✓ Acta de posesión radicado 2024EE0184445 del 23 de septiembre de 2024. Folios 548.

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Obra en el expediente electrónico el siguiente acervo probatorio.

Los siguientes cuatro (4) DVD contienen los anexos que acompañan al oficio por medio del cual se recomienda apertura de PRF dentro de la IP No. ANT_IP-2017-00352-2016-GC-085:

- ❖ DVD No. 1
 -  _Contenido_Copia_Expediente_20220421T10h26m57s
 -  _Indice_Electronico_1650554808564
 -  00001.20161101_Asignación_Antecedente_2016IE0095615
 -  00002.20160728_Oficio_TrasladoHallazgo_2016IE0065648
 -  00003.ANEXO 4. INEXISTENTES MATRICULA CONTRATADA 2014 MEN
 -  00004.Anexos_Complementación_Hallazgo_No._4
 -  00005.20180803_Auto_Apertura_0400
 -  00006.20180806_Oficio_ComunicaAlcaldía_2018EE0093160

❖ DVD No. 2

- CD 1
- Oficio_2017ER0099316

❖ DVD No. 3

- 01-FormatoAceptaciónNombramiento
- 02-Formato-CompromisoConfidencialidad 30052024
- 3b16f312-84b2-453e-892d-68f9c00576cb_LThumb
- 100TOSI PROMESA DE COMPRAVENTA CASA 80201900547
- 3264 SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA
- 20230808_AUTO DE AGREGACION PRF-40615 - REVISADO
- 20231120_2023ie0122082 SOLICITUD DE COMISORIO PARA PRACTICA DE DILIGENCIA DE VERSION LIBRE YENNY ANGULO-
- Comparto_'117_250002324000201200588021SENTENCIA202_240501_202733[1]
- cuadro auto de imputacion
- FORMATO PENSION
- platon-dialogos-iii-fedon-banquete-fedro-gredos
- platon-dialogos-iv-republica-gredos
- Resolucion#3264-Provisionales-Jun3-Yureny (1)
- SOLICITUD DE TRASLADO DE PRUEBAS

❖ DVD No. 4

- DOCUMENTOS E INFORMACION DE LAS INSITUIONES

❖ DVD No. 5: Respuesta de la Secretaria de Educación a solicitud de información:

- 20190722_2019ER0075556_RESPUESTA_SECRETARIA_EDUCACIÓN_BUENAVENTURA

❖ DVD No. 6: Traslado documentos Denuncia No. 2019-153706-80764-D:

- 20190618_2019IE0053165_LA ANUNCIACION_MI PEQUEÑA INFANCIA_ABEJA MAYA

❖ Oficio No. 2019ER0099880 del 13 de septiembre de 2019, Respuesta del Centro Educativo Abeja Maya. Folio 48.

❖ Oficio fechado el 31 de julio de 2023 respuesta a solicitud de información a la secretaria de educación distrital. Folios 184-190.

❖ Oficio No. 2023ER0109463 fechado el 20 de junio de 2023 respuesta a solicitud de información a la Cámara de Comercio de Buenaventura. Folios 195-197.

❖ Oficio No. 2023ER0222082 del 19 de noviembre del 2023, el INSTEP entrega información solicitada. Folios 249-316.

❖ Oficio No. 2023ER0220797 del 20 de noviembre del 2023, el INSTEP entrega información solicitada. Folios 318-328.

❖ Oficio No. 2023ER0231182 del 30 de noviembre del 2023, el INSTEP entrega información solicitada. Folios 329-330.

❖ Oficio entrega de información por parte del despacho de Educación fechado el 1 de abril de 2024. Folios 362-411.

VERSIONES LIBRES Y ESPONTÁNEAS

De acuerdo con las actuaciones que reposan en el expediente, el Despacho realizó las gestiones de notificación de los presuntos responsables fiscales y convocó a los

mismos a presentar versión libre y espontánea de los hechos objeto de investigación.

- YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, quien rinde versión libre mediante despacho comisorio, el 29 de noviembre de 2023. Folios 247-248:

“VERSION LIBRE Y ESPONTANEA QUE RINDE LA SEÑORA YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, C.C. 66.747.066, EN SU CONDICION DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS No. 141005 DEL 3 DE MARZO DE 2014, DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2019-00730. ENTIDAD AFECTADA: DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA

En la ciudad de Jamundí, el día veintinueve (29) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 9:40 am, ante el despacho del Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, previa citación, se hizo presente la señora YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66747.066 de Buenaventura, en condición de supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 141005 del 3 de marzo de 2014, con el fin de rendir VERSION LIBRE dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF-2019-00730, que se adelanta por presunta incidencia fiscal detrimento patrimonial ocasionado al DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, para lo cual se solicitó sus generales de ley como: Mi nombre e identificación es como quedo consignado en la parte superior de la diligencia, Dirección de residencia: COJAM. Celular: No tengo. Correo electrónico: no tengo. Edad: 49 años. Estado civil: soltera. Hijos: dos. Nivel académico: Magister. Ocupación actual: privada de la libertad. Se le hace saber que para la diligencia podrá estar asistida por un apoderado, a lo cual manifiesta que es mi voluntad ser asistida por un abogado de oficio.

Quien rinde la versión
YENNY MARIA ANGULO QUINTANA

Quien practica la diligencia
Funcionario comisionado”

En vista que en la diligencia de Versión Libre y Espontánea la presunta Yenny María Angulo Quintana, solicita apoderado de oficio, que se encuentra privada de la libertad y en concordancia con el artículo 42 de la Ley 610 del 2000, el Despacho procedió a designar Apoderado de Oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 610 de 2000, mediante el Auto de Designación No. 528 del 30 de agosto de 2024, para lo cual se posesiono el estudiante de consultorio Jurídico, LAURA CATALINA ANDRADE CORREA identificada con cedula de ciudadanía 1.005.890.703 de Cali.

- SONIA SEGURA SANCHEZ: Citaciones radicados No. 2023EE0163737 del 25 de septiembre de 2023. Folio 217; No. 2023EE0170883 del 4 de octubre de 2023 y No. 2024EE0187184 del 10 de mayo de 2024. Oficio radicado No. 2024EE0094252 versión libre y espontánea de la señora Sonia Segura Sánchez. Folios 495-498, detalles a continuación:

“EXPOSICION LIBRE Y ESPONTANEA RENDIDA POR LA SEÑORA SONIA SEGURA SANCHEZ, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 66.744.423 DE BUENAVENTURA – VALLE

En Santiago de Cali D.E., a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024, siendo las 10:00 a.m., responde mediante un correo electrónico, la señora SONIA SEGURA SANCHEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423 quien fue citada mediante el radicado con SIGEDOC No. 2024EE0087184 del 10/05/2024 a presentar versión libre y espontánea de los hechos objeto materia de investigación del PRF-2019-00730 que, mediante un escrito desea rendir la versión libre y espontánea.

Por medio de este documento se le hace conocer el derecho que tiene a ser asistida por un abogado y además se le informa que está libre de apremio y juramento. Se le advierte

sobre las excepciones al deber de declarar, según lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Política:

“Artículo 33. Límites al deber de declarar. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”

La Señora Segura, manifiesta que no tiene ninguna clase de impedimento y que es su voluntad rendir esta declaración, no sin antes dejar constancia que también manifiesta no considerar necesario la asistencia de un abogado, para esta diligencia.

- A continuación, se redactan las preguntas que deben ser contestadas por la versionista:

1. Diga cuál es su nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, residencia, estudios realizados, profesión, ocupación u oficio, entidad y dependencia donde actualmente labora.

R//. SONIA SEGURA SÁNCHEZ
FECHA DE NACIMIENTO: 14/01/1973
Domicilio, residencia: CRA 64 C # 8-51 Buenaventura
Estudios realizados: UNIVERSITARIOS
Profesión: ESTADÍSTICA
Ocupación: DOCENTE
Entidad: UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

2. ¿Tiene usted conocimiento de los hechos del Proceso de Responsabilidad Fiscal No.PR-2019-00730?, los que versan sobre la contratación de entidades educativas para la ampliación de cobertura en el Distrito Especial de Buenaventura durante la vigencia 2014, donde usted fungió como Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, entre la Secretaría de Educación de Buenaventura y El INSTEP? Si su respuesta es positiva, ¿qué tiene usted que decir al respecto?

R//. Mi participación no fue como interventora, ya que para la interventoría del contrato fue contratada la fundación un hombro donde llorar. Fui contratada por la secretaria de educación como profesional de apoyo al proceso de ampliación de cobertura y luego se me asignó una función de supervisar los contratos. Esta supervisión fue de forma documental, como consta en las actas de supervisión, donde se especifica que se revisaron libros de matrícula, listados de asistencias, contra el anexo 1, que contiene la lista de estudiantes subsidiados, no me correspondía supervisar el SIMAT, ni tampoco verificar en los colegios la existencia de dichos estudiantes, también se revisó el informe mensual de los contratistas, mi contrato fue por seis meses, y el contrato del colegio en mención fue por 10 meses. Se aclara que, si al revisar asistencias se evidenciaba que el estudiante no asistía a las clases, este se descontaba del pago. Todos los documentos revisados en la supervisión reposan en la secretaria de educación, así como las actas de supervisión.

La única persona contratada para ejercer la supervisión de alrededor de 30 contratos fui yo, por lo tanto, fue limitada a revisar asistencia de estudiantes y anexo No. 01. La asistencia y todos los otros documentos mencionados eran entregados por los contratistas en la oficina de la secretaria de educación, donde se realizaba la revisión, estos se archivaron en la misma oficina.

3. ¿Considera usted que tiene algo más que manifestar para información del despacho sobre los hechos ocurridos?

R// Que a cada contratista se le remitía un listado de estudiantes a subsidiar, el cual se llama anexo 1, los contratistas debían matricular a estos estudiantes y brindar la atención, cumpliendo con los planes de estudios según su PEI y además con los registros de asistencia, notas, observadores, etc. La secretaria de educación desde la supervisión, que yo ejercí, solo revisaba el cumplimiento de la matrícula y la asistencia de los subsidiados, no necesariamente se subsidiaban todos los estudiantes que se matriculaban en una institución, por lo que puede ser que en una

institución haya más niños en el SIMAT que en el anexo 1. A los estudiantes en el SIMAT, que no estén en el anexo 1, no se les hacía revisión, de mi parte. Hago esta aclaración porque la supervisión que contrató el ministerio revisó el SIMAT, donde se reportan los niños que se matriculan en una institución, ya se subsidiados o no. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma quien en ella intervino, una vez leída y aprobada.

SONIA SEGURA SANCHEZ
C.C. No. 66.744.423”.

A pesar de las repetidas citaciones realizadas, no comparecieron a la diligencia los siguientes presuntos:

- BARTOLO VALENCIA RAMOS: Citaciones radicados No. 2023EE0163737 del 25 de septiembre de 2023, No. 2023EE0186922 del 25 de octubre de 2023 y No. 2024EE0087228 del 10 de mayo 2024.
- INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “INSTEP”: Citaciones radicados No. 2023EE0170958 del 4 de octubre de 2023 y No. 2024EE0087154 del 10 de mayo de 2024. Folios 245 y 433; y el CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA: Citación radicado No. 2023EE0164702 del 26 de septiembre de 2023. Folio 218.

Al no comparecer a la diligencia de versión libre y espontánea y con el fin de garantizar el debido proceso de los implicados, el Despacho procedió a designar Apoderados de Oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 610 de 2000, mediante el Auto de Designación No. 351 del 20 de junio de 2024, para lo cual se posesionaron los estudiantes de consultorio Jurídico:

- JUAN ESTABAN CALDERON RUANO identificado con cedula de ciudadanía 1.085.950.721 de Cali como apoderado de BARTOLO VALENCIA RAMOS identificado con cedula de ciudadanía No. 16.469.636, quien posteriormente cancelo la materia de consultorio jurídico por lo cual tuvo que ser sustituido; para tal sustitución fue nombrada la estudiante LLERLY ASNEILY NOGUERA BURBANO RUANO identificada con cedula de ciudadanía 1.088.156.007 de Cali.
- MIGUEL ANGEL CARABALI MARQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.107.529.855 de Cali, como apoderado del INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO-INSTEP, identificado con NIT. 830.001.684-1 y del Centro Educativo ABEJA MAYA, identificado con NIT. 31.589.962-1.

CONSIDERACIONES RESPECTO A LA VERSION LIBRE DE LA PRESUNTA SONIA SEGURA SANCHEZ

La versión libre presentada por la presunta Sonia Segura Sánchez, verifica las evidencias como supervisora/interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, documentos presentados por la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura, que la nombra:

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 15 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	CÓDIGO:	FG-GI-CA-37
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	14/10/2008
		PÁGINA:	1 DE 1
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA			

Fecha: Marzo 03 de 2014

Señora
SONIA SEGURA SANCHEZ
Apoyo al Programa de Ampliación de Cobertura



De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta, Numeral 4, del Contrato de Prestación de Servicios No. 140711 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA, me permito informarle que ha sido designada para realizar la Supervisión/Interventoría al siguiente Contrato :

No. de Contrato:	141005
Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL CON EL INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO "INSTEP" PARA LA ATENCIÓN DE 1.402 ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA, CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN EL BANCO DE OFERENTES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, PARA LA VIGENCIA LECTIVA 2014.
Contratista:	INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO "INSTEP"
Valor:	\$ 1.261.800.000=

El Supervisor/Interventor deberá ejercer funciones de Vigilancia Técnica, Administrativa Pedagógica y Financiera del Contrato, dando a conocer oportunamente el estado o avance de las actividades realizadas por el Contratista.

Adjunto la siguiente documentación:

DESCRIPCION
Copia del Contrato (Incluye documentos etapa precontractual)
Copia de Pólizas
Anexos Contractuales

Atentamente,	Recibí:
 YENNY MARIA ANGULO QUINTANA Secretaria de Educación Distrital	 SONIA SEGURA SANCHEZ Supervisora/Interventora

Por lo tanto, su argumento de que no era la interventora del contrato no es cierto.

CONSIDERACIONES

OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A través del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaración jurídica, en la cual se predica con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasión de la gestión fiscal que ha realizado, y que está obligado a reparar económicamente el daño causado al erario por su conducta dolosa o gravemente culposa (artículo 1 Ley 610 de 2000).

La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un servidor público o de un particular o persona que ejerce funciones públicas, por el incumplimiento de los deberes que le incumben, o por estar incurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes o recursos públicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaración el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una

indemnización pecuniaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Esta responsabilidad puede comprender desde la órbita de la Gestión Fiscal a los directivos de las entidades y demás personas que manejen o administren recursos o fondos públicos, así como a quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación; también a los contratistas y particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, desde la Gestión Fiscal, con ocasión de esta o que contribuyan al detrimento público.

La Responsabilidad Fiscal tiene carácter resarcitorio ya que su único fin consiste en reparar el patrimonio público que ha sido menguado por servidores públicos o particulares que realizaron una gestión fiscal irregular. Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal no pretende castigar a quienes han causado un daño patrimonial al Estado, sino que busca simplemente resarcir o reparar dicho daño.

Para corroborar este carácter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal sólo hace falta consultar el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que a la letra dice: **“Objeto de la responsabilidad fiscal.** La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.”

En este mismo orden de ideas es una responsabilidad independiente de la disciplinaria y la penal. Por ello, una misma conducta puede dar origen a los tres tipos de responsabilidad - fiscal, penal y disciplinaria. La penal y la disciplinaria tienen un propósito concreto: castigar determinadas conductas que se consideran socialmente reprochables. La Responsabilidad Fiscal por el contrario sólo busca que el patrimonio público permanezca indemne. El propósito es indemnizatorio: quienes han causado un detrimento patrimonial al erario deben repararlo.

De acuerdo con lo anterior, la Responsabilidad Fiscal se estructura sobre tres elementos: a) un Daño Patrimonial al Estado; b) una Conducta Dolosa o Gravemente Culposa atribuible a una persona que realiza Gestión Fiscal y; c) un nexo causal entre el Daño y la Conducta. Sólo en el evento de que se reúnan estos tres elementos puede endilgarse responsabilidad fiscal a una persona.

Dada la importancia del punto es necesario desarrollar el concepto de **“Daño Patrimonial al Estado”**.

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto. Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante.

La precitada Ley 610 del 15 de agosto de 2000 en su artículo 6 consagra: **“Daño Patrimonial al Estado.** Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 17 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.” (Subrayado declarado inexequible Sentencia C-340-2007).

Lo primero que se destaca es que el daño patrimonial al Estado es producido en ejercicio de la gestión fiscal. Esto es coherente con el artículo 5 de la misma ley que dispone como uno de los elementos de la Responsabilidad Fiscal *“una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.”* Es lógico que si la responsabilidad fiscal sólo puede ser atribuida a alguien que realiza gestión fiscal necesariamente esa responsabilidad lo será por un daño causado en ejercicio de dicha gestión. Deben reunirse, entonces, los dos elementos: a) una persona que realiza gestión fiscal o actúa con ocasión de esta; y b) el daño debió haber sido producido en ejercicio de esa gestión fiscal o con ocasión de esta. Contrario sensu si el daño lo efectúa una persona que no realiza gestión fiscal o no se produce en ejercicio de la gestión fiscal, no existirá responsabilidad fiscal.

Este punto es central en el estudio de la Responsabilidad Fiscal puesto que ella se estructura sobre el concepto de Gestión Fiscal. La Contraloría General de la República la vigila y la Responsabilidad Fiscal precisamente se deriva de ella. Esta es el pilar, contemplado en el artículo 3 de la ley 610 de 2000, sobre el cual se debe estructurar cualquier teoría seria al respecto. Es el elemento propio que la diferencia de otras responsabilidades y le da autonomía conceptual.

En segundo lugar, la Ley nos dice que la gestión fiscal que produce el daño es aquella antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Lo cual básicamente quiere decir que el daño patrimonial al Estado ocurre cuando los gestores fiscales actúan de forma contraria a los principios que rigen la función administrativa en general y la gestión fiscal en particular.

En síntesis, el Daño Patrimonial al Estado es producido en desarrollo de la Gestión Fiscal. La Ley contempla una serie de calificativos para la gestión fiscal que produce el daño: en general se trata de una gestión fiscal que contraría los principios establecidos para la función administrativa y los fines o cometidos Estatales.

EL CASO CONCRETO

La Alcaldía Distrital de Buenaventura dentro del Programa de Ampliación de Cobertura Educativa, suscribió con el Instituto Tecnológico Panamericano "INSTEP", el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de Marzo de 2014, por un valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.261.800.000), cuyo objeto contractual se definió como: *“Prestación del servicio educativo estatal con Instituto Tecnológico Panamericano "INSTEP" para la atención de 1.402 estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, con instituciones del sector privado inscritas en el banco de oferentes del Distrito Especial de Buenaventura, para la vigencia lectiva 2014”.*

El Instituto Tecnológico Panamericano INSTEP, realiza el Convenio No. 011-14 con varias instituciones privadas, entre ellas el CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, para la prestación de servicios educativos, a quien se le asignan 44 cupos, y por los cuales el centro educativo en mención, recibe los respectivos pagos.

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional - MEN, adelanto interventoría a la matrícula contratada para el año 2014, por la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Buenaventura, a través de la firma interventora C&M Consultores S.A., con el fin de verificar la prestación del servicio educativo en los cupos asignados, estableciendo la existencia de estudiantes ficticios, que excedieron la matrícula para dicha vigencia, la cual se elaboró con base en las actas de visitas de campo suscritas por los auditores y los rectores de cada una de las

instituciones educativas distritales, quedando plasmadas en el archivo *INEXISTENTES CONTRATADA DEPURADO-BASE AUDITORIA MEN 2014-SOPORTADA EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION*, que contiene la base de datos de los alumnos inexistentes detectados en la matrícula del Distrito.

De acuerdo a lo anterior se adelanta la Indagación Preliminar ANT-IP-2017-00352, donde a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y con la Fundación Comunitaria Despertar, se procedió al acopio de la ficha técnica de los estudiantes presuntamente inexistentes de la vigencia 2014, la cual consta de los siguientes documentos:

- 1.- Fotocopia del documento de identidad,
- 2.- Registros de calificaciones o boletín individual de desempeño,
- 3.- Certificación del Rector sobre la matrícula de los estudiantes,
- 4.- Comprobantes de Egreso,
- 5.- Certificado de disponibilidad presupuestal,
- 6.- Registro presupuestal.

Tabla No.1. Ficha Contrato de Prestación de servicios No. 141005

DATOS DEL CONTRATANTE	CONTRATANTE		DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL			
	IDENTIFICACIÓN		NIT. 890.399.045-3			
	REPRESENTANTE LEGAL		BARTOLO VALENCIA RAMOS			
	CARGO		ALCALDE DISTRITAL			
	IDENTIFICACIÓN		C.C. No. 16.469.636			
DATOS DEL CONTRATISTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR	LUGAR DE EJECUCION	
	No. 141005		3 DE MARZO DE 2014	\$1.261.800.000	Distrito especial de Buenaventura - Valle del Cauca.	
	CONTRATISTA		INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO "INSTEP"			
	IDENTIFICACIÓN		NIT. 835,001,684-1			
	REPRESENTANTE LEGAL		ELIZABETH RIASCOS R.			
	IDENTIFICACIÓN		C.C.No. 1.111.777.019 de Buenaventura			
	PLAZO INICIAL		10 meses	DESDE: 3 de marzo de 2014	HASTA: diciembre de 2014	
	FORMA DE PAGO		El Distrito Especial de Buenaventura cancelará al contratista prestador del servicio educativo, 10 cuotas mensuales vencidas por un valor de CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$126.180.000), cada una, previa presentación de informes por parte del Contratistas y la firma del funcionario designado			
	SUPERVISIÓN		Sera efectuada por la secretaria de educación y/o por la interventoría que llegare a ser contratada por el distrito.			
	SUPERVISOR		YENNY MARIA ANGULO QUINTANA			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	CARGO		Secretaria de Educación			
	TIPO DE CONTRATACION		CONTRATACION DIRECTA			
	CLASE DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
	OBJETIVO		Prestación de servicio educativo estatal con el Instituto Tecnológico Panamericano "INSTEP" para la atención de 1.402 estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, con instituciones del sector privado inscritas en el banco de oferentes del distrito de Buenaventura, para la vigencia 2014.			
	FUENTE DE FINANCIACIÓN		RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIO SGP – EDUCACION.			
ESTADO		LIQUIDADO				
PAGOS SOPORTE						
No. ORDEN DE PAGO		FECHA ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	FUENTE FINANCIACIÓN
201401582		12/05/2014	87693	PRIMERA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201401581		5/06/2014	88071	SEGUNDA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201405165		5/09/2014	89903	TERCERA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201405594		5/09/2014	90329	CUARTA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201406580		9/10/2014	91149	QUINTA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201407039		10/11/2014	91418	SEXTA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201407040		10/11/2014	91420	SEPTIMA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201408422		26/12/2014	92337	OCTAVA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201709777		05/05/2015	96376	NOVENA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
201409988		04/03/2015	95069	DECIMA CUOTA	\$126.180.000	S. G. P.
TOTAL, PAGOS					\$1.261.800.000	

En oficio radicado No. 2018EE0093160 del 06 de agosto de 2018, se solicita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura la información pertinente, quien en oficio No. 2018ER0101520 del 01 de octubre de 2018, suscrito por el Secretario de Educación Distrital, remite los expedientes contractuales de ampliación de cobertura educativa vigencia 2014.

Por su parte, mediante radicado No. 2019ER0002368 del 11 de febrero de 2019, el Centro Educativo Abeja Maya, manifiesta que durante la vigencia 2014, la institución no presto el servicio educativo a:

Tabla No. 2. Estudiantes no atendidos

DOCUMENTO	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	FECHA DE NACIMIENTO
	OROBIO	RIVERA	KAREN	DAYANA	
1151446342	GONGORA	SOLIS	GREILIM	STEFANI	29/05/2010

Situación de la que no se tenía conocimiento y estudiantes por los cuales se pagó la totalidad del año lectivo. Este hecho corresponde a los presuntos pagos indebidos efectuados por la Administración Distrital de Buenaventura al INSTEP, por concepto de prestación del servicio educativo en el Centro Educativo Abeja Maya; lo cual obedece a las deficiencias en los mecanismos de control y de supervisión de la contratación de los recursos de ampliación de cobertura por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura. La presunta sobrestimación de la matrícula contratada conlleva a la pérdida de recursos potenciales que estaban dirigidos a la educación de niños y adolescentes del Distrito Especial de Buenaventura.

De acuerdo con la evidencia obtenida, se solicita adelantar informe técnico, en los términos del artículo 27 y el artículo 31 de la Ley 610 del 2000, en el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, requiriéndole al profesional designado establecer si se prestó el servicio educativo a todos los estudiantes a que se obligó el Contratista, a través del Centro Educativo Abeja Maya, o en su defecto establecer los estudiantes a los que no se les prestó y su debida cuantificación.

Los informes técnicos y complementos de los informes entregados por el Ingeniero de Sistemas Edward Adrián Colorado Ángel, arrojaron varias conclusiones, las cuales se detallan a continuación:

1. En el primer informe técnico rendido el 12 de diciembre de 2023 mediante oficio No. 2023IE0131643 se llegó a la conclusión:

“Resultado del análisis realizado se concluye lo siguiente:

La cuantificación del valor real de los pagos efectuados dentro del contrato de prestación de servicios educativos 141005 del 3 de marzo de 2014, suscrito entre la alcaldía distrital de Buenaventura y el Instituto Tecnológico Panamericano "INSTEP" de acuerdo a lo pactado en el contrato referenciado.

Debido a que no se logró obtener el anexo 1 del contrato en mención, documento indispensable para realizar el cruce y análisis con la información de los estudiantes inexistentes reportados en la interventoría realizada por el Ministerio de Educación, no fue posible definir cuáles fueron los estudiantes atendidos y los presuntamente no atendidos por la Institución del Contrato número 141005 de 2014”.

En este momento no se obtuvo la identificación de los estudiantes que aparecen como ficticios o no atendidos, ni un valor de detrimento patrimonial concreto, por lo que fue necesario solicitar y realizar un segundo informe, para lo cual en el mes de abril se realiza Visita Fiscal Especial a las oficinas de la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura, con el fin de recaudar información que atañe a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios, materia de investigación.

Se obtuvieron documentos por parte de la Secretaría de Educación y de La Anunciación, el INSTEP se comprometió a enviar lo que tenían en sus archivos, lo que nos sirvió de insumo para realizar un segundo informe. A continuación, el acta de la visita:

**ACTA DE DILIGENCIA VISITA FISCAL ESPECIAL
PRF-2019-00730 Y PRF-2019-00813
ENTIDAD AFECTADA: DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA**

FECHA: 17 al 19 de abril de 2024
LUGAR: Alcaldía Distrital de Buenaventura – Secretaria de Educación - Piso 6
ENTIDAD AFECTADA: Distrito Especial de Buenaventura

PARTICIPANTES

SECRETARIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	
Nombre	Cargo
Irlanda Rodríguez Castro	Secretaria de Etnoeducación
Félix Alexander Lozano Palacios	Líder de Cobertura Educativa

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
Nombre	Cargo
Edward Adrián Colorado Ángel	Profesional Universitario – Apoyo Técnico
Sandra Patricia Barcos Garcia	Profesional Universitario- Sustanciadora

1. Objetivo de la Visita

Practicar Visita Fiscal Especial, en los términos del Artículo 31 de la Ley 610 de 2000, a la Secretaria de Educación del Distrital de Buenaventura, o en el lugar donde se encuentren ubicados sus archivos; con el propósito de recaudar información que atañe a la ejecución de los Contrato Prestación de Servicios que se relacionan en la tabla 1, suscritos por la Alcaldía Distrital de Buenaventura:

Tabla 1

PRF	Colegio Contratista	Contrato
PRF-2019-00730	INSTEP	141005 del 03/03/2014
PRF-2019-00730	Centro Educativo Abeja Maya	141005 del 03/03/2014
PRF-2019-00813	Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Anunciación	1410405 del 03/03/2014

2. Desarrollo

MIERCOLES 17 DE ABRIL 2024

En el Distrito Especial de Buenaventura Valle del Cauca, el día 17 de abril de 2024, siendo las 11:00 am; los profesionales universitarios Sandra Patricia Barcos Garcia y Edward Adrián Colorado Ángel, adscritos a la Contraloría General de la Republica Gerencia Valle, se hicieron presentes en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Buenaventura Valle del Cauca – Secretaria de Educación, ubicada en la Calle 2 Carrera 3 Edificio CAD piso 6 barrio Centro, con el fin de llevar a cabo diligencia de visita fiscal especial, dispuesta mediante Autos No. 122 y 123 del 29 de febrero de 2024 dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00730 y 2019-00813, siendo atendida por los funcionarios Félix Alexander Lozano Palacios identificado con la C.C. No. 1.107.047.810 de Cali, en calidad de Líder de Cobertura Educativa e Irlanda Rodríguez Castro identificada con la C.C. No. 27.258.166 de Buenaventura, Secretaria de Etnoeducación, quienes están a cargo de suministrar la información y documentación requerida en el desarrollo de la presente diligencia.

En el desarrollo de la reunión, se informa que la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca adscrita a la Contraloría General de la República, mediante Auto No. 510 del 20 de agosto de 2019, ordenó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No.2019-00730 y el Auto No. 580 del 12 de septiembre de 2019, ordenó la apertura del Proceso de

Responsabilidad Fiscal No.2019-00813, con el fin de esclarecer el hallazgo con presunta incidencia fiscal resultado de la Indagación Preliminar ANT_IP-2017-00352 realizada a instancias de la Actuación Especial AT de ACE No.64 de 2014, recursos de Educación Sistema General de Participaciones SGP, Ampliación de Cobertura, vigencias 2012, 2013 y 2014, practicada al Distrito Especial de Buenaventura - Valle del Cauca - Secretaría de Educación en la administración de los recursos del SGP durante la vigencia 2019.

Conforme a los anterior, mediante varios oficios se solicitó a la Secretaría de Educación de Buenaventura suministrar la siguiente información respecto a los Contratos No.141005 y 141040 suscritos con el INSTEP y la Congregación Religiosa Provincia de San José Hermanitas de la Anunciación respectivamente, en cumplimiento del programa de ampliación de cobertura, vigencia 2014, con el fin evidenciar la prestación del servicio educativo:

- 1. Copia de los Contratos No.141005 y 141040 y anexo No.1 de cada contrato.*
- 2. Nombre, datos personales y ubicación del representante legal de INSTEP y la Congregación Religiosa Provincia de San José Hermanitas de la Anunciación*
- 3. Informes de supervisión y comprobantes de pago del servicio educativo.*

Teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta, se reiteró el requerimiento mediante los oficios No.2024EE0056045 y 2024EE0056078 enviados por correo electrónico el 22 de marzo de 2024 que contienen la siguiente solicitud:

“...Atendiendo al objeto de los Contratos No.141005 y 141040 del 03 de marzo de 2014, suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura (Valle del Cauca) y INSTEP y la Congregación Religiosa Provincia de San José Hermanitas de la Anunciación, en cumplimiento al programa de ampliación de cobertura, vigencia 2014, con el fin de establecer la prestación del servicio educativo, respetuosamente se requiere suministrar la siguiente documentación que permita realizar cruce y análisis con la información de los alumnos inexistentes reportados en la interventoría realizada por el Ministerio de Educación:

- 1. Copia los Contratos No.141005 y 141040 y anexo No.1 de cada contrato.*
- 2. Relación detallada de los estudiantes atendidos con el servicio educativo a través del Centro Docente Mi Pequeña Infancia adjuntando las respectivas evidencias.*
- 3. Nombre, datos personales y ubicación de los representantes legales de INSTEP y la Congregación Religiosa Provincia de San José Hermanitas de la Anunciación.*
- 4. Informes de supervisión y comprobantes de pago del servicio educativo.*

Del requerimiento anterior se recibió información parcial, solo envían respuesta del contrato 141005 PRF-2019-00730. El señor Félix Alexander Lozano Palacios, nos informa que la Fiscalía en ocasión de un proceso que se le apertura al exalcalde Bartolo Valencia Ramos, se llevó todas las carpetas con la información de la contratación de la vigencia 2014, donde el mencionado exalcalde fungía como ejecutivo del municipio, nos expresa que la fiscalía devolvió algunos documentos en físico y que otros fueron entregados digitalmente, que es por ello que hacen falta información de dichos contratos.

La Secretaría de Etnoeducación expresa que el Anexo 1 de los contratos que estamos solicitando, no lo tienen en Excel, que en el 2014 no se tenía reglamentación como la que se tiene ahora con el Decreto 1851 de 2015, por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas, por lo tanto, la información y la contratación de esa época tienen muchas inconsistencias.

Igualmente, la doctora Irlanda, nos informa que no tienen toda la información pero que van a ir con nosotros a cada uno de las instituciones, para solicitar lo que se está requiriendo, que contactaremos a los representantes legales o a los dueños de los colegios, para agendar la visita.

JUEVES 18 DE ABRIL 2024

Siendo las 9:00 am del día 18 de abril de 2024 nuevamente nos hicimos presentes en el despacho de la Secretaría de Etnoeducación para continuar con la diligencia de visita fiscal obteniendo la siguiente información y documentación:

- 1. Contrato No.141005 y 141040 del 3 de marzo de 2014
- 2. Anexo 1 en PDF que está en imagen y no permite convertirlo a Excel.
- 3. Comprobantes de egreso
- 4. Certificación de existencia de los establecimientos educativos INSTEP y la Congregación Religiosa Provincia de San José Hermanitas de la Anunciación.

Un funcionario de la oficina de control, Alejandro Londoño, envían al correo del ingeniero Colorado, una carpeta compartida en la nube que inicialmente no se podía abrir, se solicitaron los permisos y se descarga la información para el PRF-2019-00730, la del PRF-2019-00813, no se logra obtener.

En vista de lo sucedido con la carpeta que nos compartieron, el líder de cobertura Alexander Lozano, nos suministró el contacto del propietario del INSTEP, señor Segundo Edgar Angulo, quien nos atendió vía telefónica y se comprometió a enviarnos información la cual le solicitamos mediante oficio con radicado 2024EE0072370 por correo electrónico; de igual forma nos proporcionó el contacto de la Provincial de la Congregación Religiosa Provincia de San José Hermanitas de la Anunciación, la Hermana Flor Alba Reyes, quien nos manifestó su intención de reunirnos mañana viernes en Cali, pero le informamos que estamos en la ciudad de Buenaventura, nos contactó entonces con la Hermanita Juana Gregoria Plata Ortiz, agendamos reunión y estuvimos conversando con ella, y se comprometió a enviarnos información, la cual le solicitamos mediante oficio con radicado 2024EE0072399 por correo electrónico.

VIERNES 19 DE ABRIL 2024

Nos dirigimos a la Secretaria de Educación, para finalizar la diligencia, pedimos nuevamente que nos otorguen los permisos para abrir la información del PRF-2019-00813 que no habíamos podido descargar, para firmar el acta de la visita fiscal y recibir los documentos de permanencia.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por quienes intervinieron, una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes, en el Distrito Especial de Buenaventura a los 19 días del mes de abril de 2024.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BUENAVENTURA	
IRLANDA RODRIGUEZ CASTRO Secretaria de Etnoeducación	FELIX ALEXANDER LOZANO PALACIOS Líder de Cobertura Educativa
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
EDWARD ADRIAN COLORADO ANGEL Profesional Apoyo Técnico	SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA Profesional Sustanciadora

- 2. En el segundo informe técnico rendido el 6 de mayo de 2024 mediante oficio No. 2024IE0049225 se llegó a la conclusión:

“Resultado del análisis realizado se concluye lo siguiente:

Se solicitó adelantar informe técnico, en los términos del artículo 27 y el artículo 31 de la Ley 610 del 2000, en el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, acerca de la Prestación de Servicios Educativos adelantado mediante el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 de 2014, suscrito entre el Distrito de Buenaventura y el Instituto Tecnológico Panamericano “INSTEP”, mediante el Centro Educativo Abeja Maya, como prestador de Servicios Educativos del Instituto Tecnológico Panamericano “INSTEP”, solicitándole al profesional designado establecer si se prestó el servicio educativo a todos los estudiantes a que se obligó el Contratista, a través del Centro Educativo Abeja Maya, o

en su defecto estableciendo los estudiantes a los que no se les prestó y su debida cuantificación.

Se analizó la información enviada por la entidad y se definió el presunto detrimento de 6 estudiantes, para los cuales no se aportó certificado de notas, se reconoció un presunto valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTO MIL PESOS (\$5.400.000) sin indexar, de acuerdo con las condiciones del contrato.

A continuación, se detalla la información de los estudiantes:

Tabla No. 3. Presunto detrimento

DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	VALOR
1113365897	PALACIOS	ANGULO	YURLEY	ZHAIRA	KINDER	\$900.000
43753108	REINOSO	COTTA	SARA	CAMILA	KINDER	\$900.000
1151446342	GONGORA	SOLIS	GREYLING	ESTEFANY	KINDER	\$900.000
37357167	TORRES	VALENCIA	CARLOS	ANDRES	QUINTO	\$900.000
151447204	GONZALEZ	GARCIA	MARIA	FERNANDA	KINDER	\$900.000
	ARCHOOR	PORTOCARRERO	VALENTINA		KINDER	\$900.000
TOTAL						\$5.400.000

Fuente: Primer informe técnico del 12 de diciembre de 2023

En este segundo informe técnico se concluye que el detrimento patrimonial asciende a CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 5.400.000), por los estudiantes que aparecen como inexistentes.

En la oportunidad de presentar la versión libre que tuvo el director del INSTEP, allego a este despacho nueva evidencia de atención, de los estudiantes que aparecen como inexistentes de acuerdo a la conclusión del segundo informe, lo que llevo a solicitar un complemento de dicho informe.

3. En el complemento del segundo informe técnico, rendido el 24 de mayo de 2024 mediante oficio No. 2024IE0056339 se llegó a la conclusión:

Dos de los estudiantes inexistentes tienen evidencia de la prestación del servicio durante todo el año lectivo 2014 y que los otros cuatro tienen evidencia de algunos meses, la evidencia consiste en informe de notas, registro civil, ficha de matrícula y listas de asistencia mensual, detallados en la siguiente tabla:

Tabla No. 4. Relación de medios de prueba por alumno

Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Grado	Informe de notas	Registro Civil	Ficha matrícula	Lista Asistencia	Conclusión
1113365897	Palacios	Angulo	Yurley	Zhaira	Kínder	OK	OK	OK	febrero, marzo, abril mayo junio agosto, septiembre, octubre y noviembre.	Vigencia completa
43753108	Reinoso	Cotta	Sara	Camila	Kínder	OK	OK	OK	febrero, marzo, abril mayo junio agosto, septiembre, octubre y noviembre	Vigencia completa
1151446342	Góngora	Solís	Greyling	Estefany	Kínder		OK	OK	marzo, abril mayo, junio y agosto.	Vigencia incompleta
37357167	Torres	Valencia	Carlos	Andrés	Quinto	OK	OK	OK	febrero, marzo, abril mayo, junio, agosto.	Vigencia incompleta
151447204	González	Garcia	María	Fernanda	Kínder	OK	OK	OK	marzo, abril, mayo, junio y agosto.	Vigencia incompleta
90100263431	Archoor	Portocarrero	Valentina		Kínder	OK	OK	OK	marzo, abril, mayo, junio y agosto.	Vigencia incompleta

Fuente: Complemento del segundo informe técnico del 24 de mayo de 2024

Después del segundo informe entregado por el Ingeniero Colorado y el análisis realizado a la nueva evidencia por parte de la sustanciadora del proceso, se concluye que el Hallazgo

finalmente queda con una incidencia fiscal por valor de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000), correspondiente a los valores pagados como mayor valor por la Secretaría de Educación de Buenaventura, al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y de los cuales no se tiene evidencia; Se deduce que 4 de los 6 estudiantes no asistieron durante varios meses del año lectivo, solo parte de este, es decir no se les presto el servicio durante todo el año lectivo, como se muestra a continuación:

Tabla No. 5. Relación de valores por alumno

DOCUMENTO	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	GRADO	VALOR
1113365897	PALACIOS	ANGULO	YURLEY	ZHAIRA	KINDER	\$0
43753108	REINOSO	COTTA	SARA	CAMILA	KINDER	\$0
1151446342	GONGORA	SOLIS	GREYLING	ESTEFANY	KINDER	\$450.000
37357167	TORRES	VALENCIA	CARLOS	ANDRES	QUINTO	\$360.000
151447204	GONZALEZ	GARCIA	MARIA	FERNANDA	KINDER	\$450.000
90100263431	ARCHOOR	PORTOCARRERO	VALENTINA		KINDER	\$450.000
TOTAL						\$1.710.000

Fuente: Elaborado por la sustanciadora.

Lo anterior nos permite inferir que el contratista no ejecuto las actividades pactadas, no atendió la totalidad de los niños que se le asigno, sin embargo, se autorizó el pago total del contrato. La ausencia de supervisión y la falta de controles en el área de Tesorería al momento de autorizar los pagos, generó la pérdida de recursos públicos.

Este despacho encuentra que con el análisis de la evidencia entregada por el INSTEP y de acuerdo a los Informes del apoyo técnico, no se acreditaron los documentos de atención de los estudiantes que aparecen como inexistentes, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado, incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014., estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.700.000) - sin indexar, y se evidenció un incumplimiento de las obligaciones de Interventoría y Supervisión, definidas en el Art. 53 de la ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, así como una violación a lo definido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, a la ejecución contractual.

ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

1. DETERMINACIÓN DEL DAÑO

El elemento vital de la responsabilidad fiscal es el daño patrimonial al Estado, contemplado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 así: *“Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”.*

Al respecto la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, trae el siguiente comentario: *“La definición de daño que trae la Ley 610 de 2000, en forma amplia describe una serie de eventos en que se puede ver lesionado el patrimonio público, por ende, los mismos son enunciativos y no taxativos, quiere ello significar, que el detalle de las situaciones no es cerrado, sino que permite al operador jurídico determinar en cada caso en particular la conducta constitutiva de daño.*

Así, son varios los fenómenos que pueden causar un daño patrimonial al Estado en términos de la Ley 610 de 2000, siempre que estén de por medio derechos o intereses patrimoniales cuya titularidad jurídica corresponda al Estado. Debe precisarse que, la expresión intereses patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, recursos y derechos susceptibles de valoración económica cuya titularidad corresponda a una entidad pública. Correlativamente cuando estos intereses o derechos se vulneren y pueda materializarse en lo mismo un contenido económico estaremos frente a un daño patrimonial al Estado.

Ha señalado la jurisprudencia que el concepto de patrimonio público "cubija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo". También ha indicado la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 01330-01 que "el concepto de patrimonio público cubija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo."

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producidas por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las Contralorías.

La cuantía del detrimento, teniendo como base el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, la cual fue producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que no se aplica a los fines esenciales del Estado, se ha ocasionado en este caso por la omisión de los servidores públicos que en forma dolosa o culposa contribuyeron al detrimento del patrimonio público, como lo fueron los supervisores e interventores del presente contrato.

Al no ejercer la debida supervisión, esto dio pie a que no se percataran que había estudiantes que no cursaron el año lectivo completo, tal y como lo muestran los informes técnicos realizados. Con base en este apoyo y después de analizadas las evidencias entregadas por los presuntos se llega a la conclusión que el detrimento patrimonial asciende a la suma de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000), sin indexar.

El Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 de 2014, suscrito entre el Distrito Especial de Buenaventura y el Instituto Tecnológico Panamericano "INSTEP", y como sub contratista el Centro Educativo Abeja Maya, tenía como objeto la atención de 44 cupos. En el primer informe técnico realizado, se analizó la información enviada por la entidad mediante el cruce de las bases de datos, la existencia de 6 estudiantes, a los cuales presuntamente no se les prestó el servicio educativo contratado. Estos estudiantes se encuentran detallados en al archivo *Inexistentes INSTEP- Abeja Maya.xls*, con lo que se tiene un presunto detrimento por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$5.400.000), de acuerdo con las condiciones del contrato.

Con base en esta información se solicitó a la institución el soporte de la atención de los estos seis (6) alumnos, para lo cual debían enviar la siguiente documentación:

- Ficha de matrícula del año 2014.
- Certificado de notas de las materias cursadas durante el año 2014.
- Copia del documento de identidad.

Posterior al informe realizado por el profesional en Ingeniería de Sistemas de la

Contraloría General de la Republica y después de haber recibido nueva evidencia por parte del Director del INSTEP, se realiza un complemento de informe con el cual la sustanciadora deduce que de los seis estudiantes encontrados como inexistentes dos cursaron el año lectivo completo y cuatro lo hicieron de manera parcial, de los 10 meses del año lectivo, la evidencia de estos fue solo de 5 meses, mediante listas de asistencia, persistiendo la no atención de algunos, lo que conlleva a un daño patrimonial sufrido por este ente territorial que se determinó finalmente por valor de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000) sin indexar.

Tabla No. 6. Relación de medios de prueba por alumno

Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Grado	Informe de notas	Registro Civil	Ficha matrícula	Lista Asistencia	Conclusión
1113365897	Palacios	Angulo	Yurley	Zhaira	Kinder	OK	OK	OK	febrero, marzo, abril mayo junio agosto, septiembre, octubre y noviembre.	Vigencia completa
43753108	Reinoso	Cotta	Sara	Camila	Kinder	OK	OK	OK	febrero, marzo, abril mayo junio agosto, septiembre, octubre y noviembre	Vigencia completa
1151446342	Góngora	Solis	Greyling	Estefany	Kinder		OK	OK	marzo, abril mayo, junio y agosto.	Vigencia incompleta
37357167	Torres	Valencia	Carlos	Andrés	Quinto	OK	OK	OK	febrero, marzo, abril mayo, junio, agosto.	Vigencia incompleta
151447204	González	Garcia	María	Fernanda	Kinder	OK	OK	OK	marzo, abril, mayo, junio y agosto.	Vigencia incompleta
90100263431	Archoor	Portocarrero	Valentina		Kinder	OK	OK	OK	marzo, abril, mayo, junio y agosto.	Vigencia incompleta

Fuente: Elaborado por la sustanciadora.

Tabla No. 7. Relación de valores por alumno

DOCUMENTO	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	GRADO	VALOR
1113365897	PALACIOS	ANGULO	YURLEY	ZHAIRA	KINDER	\$0
43753108	REINOSO	COTTA	SARA	CAMILA	KINDER	\$0
1151446342	GONGORA	SOLIS	GREYLING	ESTEFANY	KINDER	\$450.000
37357167	TORRES	VALENCIA	CARLOS	ANDRES	QUINTO	\$360.000
151447204	GONZALEZ	GARCIA	MARIA	FERNANDA	KINDER	\$450.000
90100263431	ARCHOOR	PORTOCARRERO	VALENTINA		KINDER	\$450.000
TOTAL						\$1.710.000

Fuente: Elaborado por la sustanciadora.

Como ya se indicó en párrafos anteriores, este órgano de control estableció que de acuerdo a la evidencia entregada por el INSEPT y de acuerdo a los Informes del apoyo técnico, no se acreditaron los documentos de atención de los estudiantes que aparecen como inexistentes, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado, incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000) - sin indexar.

2. CONDUCTA

El artículo 5 de la Ley 610 de 2000, contempla que la responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

El artículo 1 de la Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal en la siguiente forma: “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.

Por su parte, el artículo 3 de la mencionada Ley define la noción de gestión fiscal en los siguientes términos: "Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación,

conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.”

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C - 840 del 9 de agosto de 2001, Magistrado ponente doctor Jaime Araujo Rentería, ha dicho: *"Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el **ordenador del gasto**, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado".*

De otra parte, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, contempla: *"Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de este..."*.

En relación con la graduación de la culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal, traemos a colación el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011: ***"Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave"***.

Teniendo en cuenta que la Ley 610 del 2000 no dispone una definición de dolo o culpa grave, resulta necesario remitirnos a otras fuentes normativas para analizar si la actuación por parte de un gestor fiscal es dolosa o gravemente culposa para que sea constitutiva de responsabilidad fiscal.

Definición de culpa grave en el Código Civil: ***"Artículo 63. Culpa Grave. La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo."***

Definición de culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.¹: ***"ARTÍCULO 6. Culpa grave. Se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones."***

A la luz del régimen establecido en la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal no sólo se predica del gestor fiscal directo, sino de todo aquel que servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo, en consecuencia en el plano de la gestión fiscal discurren tanto los gestores fiscales directos como de quienes intervienen en la misma en el marco de una relación próxima, necesaria y determinante, radican una serie de deberes u obligaciones funcionales que colocan al sujeto implicado en la capacidad de saber y conocer el conjunto de actividades fijadas por el legislador y conforme a las cuales deben adecuar su conducta para la

¹ Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

buena administración de los recursos públicos así como para el logro de los propósitos que por virtud de la Constitución y la ley se establezcan como destino de los mismos.

Descendiendo al caso que nos ocupa, es de indicar que participaron en el hecho irregular que en esta investigación se destaca, los servidores públicos que intervinieron en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, en condición de gestores fiscales, esto es, que tuvieron un poder decisorio frente al cumplimiento contractual y participaron en los trámites contractuales en su calidad de ordenadores del gasto del Distrito Especial de Buenaventura, así como el Supervisor del Contrato, por consiguiente, se procede a la imputación de cargos de los presuntos responsables fiscales en su condición de servidores públicos y gestores fiscales en su orden son:

- BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 3 de marzo de 2014.
- YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos y supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 3 de marzo de 2014.
- SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014.
- INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “INSTEP”, identificado con NIT. 835.001.684-1, representado legalmente por Elizabeth Riascos Riascos, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.777.019, Contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, quien a su vez mediante el convenio No. 011-14 contrata a la institución privada, CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA.
- CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, identificado con NIT. 31.589.962-1, representado legalmente por Paola Andrea Molina Angulo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, para que preste los Servicios Educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014.


Las actuaciones de los servidores públicos en la contratación estatal están sujetas al cumplimiento de los principios, deberes y responsabilidades consagrados en la Ley 80 de 1993 norma bajo cuya vigencia se suscribió el Contrato, que al respecto consagra:

“Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales: Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante
(...)

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. (...)”

Artículo 14. De los Medios que Pueden Utilizar las Entidades Estatales para el

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 29 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)

Artículo 23. De los Principios en las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ella. (...)
3. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

La conducta activa u omisiva, imputable al autor del daño, dolosa o culposa, no se refiere a la potestad funcional, reglamentaria o contractual de un servidor público gestor fiscal directo, sino de todos aquellos servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de un daño al patrimonio del Estado.

En este sentido, es aquel comportamiento que es contrario a derecho, para el caso del proceso de responsabilidad fiscal una conducta es antijurídica cuando la persona que maneja fondos o bienes públicos actúa de manera tal que ocasiona pérdidas, mermas o deterioros al patrimonio que le ha sido confiado, en forma dolosa o culposa.

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141040 del 3 de marzo de 2014. De acuerdo con el Manual Especifico y de Competencias Laborales Para los Empleos de la Planta de Personal de la Alcaldía De Buenaventura, tenía entre sus funciones esenciales, ser el representante político, administrativo y legal del Municipio ante las diferentes instancias del orden Departamental y Nacional, dirigiendo sus actuaciones y las de la Administración Municipal en procura de lograr el bienestar y desarrollo de la comunidad.

Funciones específicas:

Corresponde al Alcalde, en el cumplimiento de las competencias y autorizaciones dadas en la Constitución, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador del Departamento.

- A. En relación con el Concejo:
 2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales.

C) En relación con la Nación, al Departamento y a las autoridades jurisdiccionales:

2. *Coordinar y supervisar los servicios que presten en el municipio entidades nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.*
- D) *En relación con la Administración Municipal:*
- 1. *Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.*
 - 5. *Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.*
 - 7. *Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administración.*
 - 10. *Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia.*
 - 19. *Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria;*
- E) *Con relación a la Ciudadanía:*
- 1. *Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de la oficina de prensa de la Alcaldía.*

Bajo este marco funcional, el Alcalde Distrital, adquirió las obligaciones y responsabilidades entre ellas la de ejercer el control y dirección a la prestación del servicio educativo, que incluía el servicio de ampliación de cobertura educativa, en la búsqueda de alcanzar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Acorde con las funciones del cargo, le asistía una responsabilidad legal y contractual de control, dentro del marco de la gestión fiscal por el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, por su calidad, enmarcada dentro del ejercicio fiscal como gestor fiscal.

En el contrato materia de investigación, tenemos que las obligaciones del contratante de acuerdo con la Cláusula Séptima del Contrato No. 141005 de 2014, son: *“OBLIGACIONES DEL DISTRITO CONTRATANTE: Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y la naturaleza de este tipo de contrato, el DISTRITO CONTRATANTE contrae las siguientes obligaciones por la firma del presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos: a.- Cancelar al CONTRATISTA el valor del precio del Contrato en la forma y términos acordados en este instrumento. b.- Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento, supervisión, control y vigilancia del presente Contrato. c.- Realizar la evaluación del Servicio Educativo prestado por el CONTRATISTA. d.- Exigir que en desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales vigentes sobre el Servicio Educativo y los fines que persigue con la contratación de este Servicio Público. e. – Vigilar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones que contrae por la firma del presente contrato. f. – Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento y control del presente contrato, así como realizar la verificación del servicio educativo prestado. g.- Verificar el levantamiento del Acta de inicio de la ejecución del Contrato y las vigencias de las pólizas que garantizan su cumplimiento. i. – Las demás establecidas por la Ley”.*

Se omitió el cumplimiento del Contrato que el mismo suscribió y que le determinaba la obligación de pago con previa verificación de los estudiantes efectivamente atendidos, obligación contractual que no fue aplicada para efecto de los pagos que involucraba recursos del SGP, puesto que procedió a ordenar los pagos sin comprobar el cumplimiento de esta exigencia, por lo tanto se efectuaron los pagos sin verificación de los alumnos beneficiarios del servicio educativo, situación que dio lugar a pagos injustificados, sobre los cuales le asistía la responsabilidad de actuar con mayor diligencia y cuidado, omisión que evidencia la falta de control al proceso de supervisión y verificaciones a las que estaba legal y contractualmente obligado, bien sea directamente o por intermedio de los funcionarios, de lo que se evidencia las fallas en el ejercicio de un control adecuado.

Conforme al soporte probatorio legalmente allegado al Proceso se establece que durante el periodo de gestión, tuvo lugar la ocurrencia de irregularidades relacionadas con el pago por concepto de estudiantes inexistentes, en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, sin haber prestado el servicio educativo de ampliación de cobertura, que origina una presunta responsabilidad fiscal del entonces servidor público, al establecerse que incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones, al determinarse que autorizó pagos al Contratista.

De acuerdo con las circunstancias expuestas, el Despacho considera tal proceder como una omisión en el ejercicio de sus funciones que originó el detrimento patrimonial correspondiente al irregular control ejercido a la ejecución del Contrato, que estuvo a su cargo, por lo tanto, la conducta desplegada, contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es: *“La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...”*

La conducta de este funcionario consistió en autorizar los pagos del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, con el Instituto Tecnológico Panamericano - INSTEP, un pago total por MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.261.800.000), sin existir soporte del cumplimiento total del objeto contractual y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, en su calidad de Alcalde Distrital para la época de los hechos, se puede calificar como gravemente culposa, al autorizar los pagos, sin soportes o evidencias del cumplimiento total del Contrato, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, surge en virtud del ejercicio de la función pública que desempeñó, que le determinaban la responsabilidad de dirección, control y supervisión frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de control y vigilancia en la prestación del servicio educativo, en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, de ampliación de cobertura, consistente en ejercer los medios administrativos y legales a su alcance para el cumplimiento de los objetivos contractuales, medidas que no fueron adoptadas, omisión que contribuyó de manera determinante a la causación del daño patrimonial, por tal motivo, esta instancia le imputara responsabilidad fiscal a título de culpa grave por su omisión que contribuyó a la materialización del detrimento fiscal.

El artículo 48 de la Ley 610 de 2000 establece como presupuesto para imputar responsabilidad fiscal, el haberse demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado establecido mediante los medios probatorios idóneos, que en el presente caso lo constituyen el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. No. 141005 del 3 de marzo de 2014, autorizaciones de pago, Comprobantes de egreso, Informes de supervisión, formatos de registro de cupos no utilizados, fichas de matrícula, certificados de estudio, documentos de identificación, Informe técnico, pruebas testimoniales, elementos que, de acuerdo

con las consideraciones referidas en precedencia, permiten establecer que en los hechos investigados se configura detrimento de recursos públicos.

Es claro que existe un detrimento patrimonial al Estado, en consecuencia, objetivamente se encuentra demostrado el daño al patrimonio económico del Sistema General de Participaciones SGP, asignados para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, en cuantía atribuible al presunto responsable, sin indexar UN MILLON SETECIENTOS DEIZ MIL PESOS (\$1.710.000).

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL YENNY MARIA ANGULO QUINTANA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, era la Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, y fungió como Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, entre el Distrito Especial de Buenaventura y el Instituto Tecnológico Panamericano - INSTEP, por lo tanto, es necesario precisar lo siguiente:

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.

Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 33 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

(...)

9. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”

- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

(...)

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

(...)

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Sea lo primero indicar que el supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 83 y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (...)”

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 35 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

En atención a lo anterior, resulta claro que el supervisor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la supervisión, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011 establece como falta: *“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”*.

De acuerdo con la Cláusula Decima Segunda del Contrato de Prestación de Servicios Educativos, Supervisión: las labores de seguimiento y control al estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que se deriven del presente contrato serán ejecutadas por la Secretaria de Educación Distrital y/o por la interventoría que llegare a ser contratada por el Distrito. El supervisor y/o interventor será el responsable de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.

Como se puede observar, por parte de la Secretaria de Educación, no hubo el mínimo cuidado, supervisión o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente 0contractual no se encontraron evidencias del seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero que debía realizar el Supervisor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas en la cláusula mencionada para la supervisión e interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

En su condición de supervisor del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución de este. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la supervisión, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo de YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, se encontraba una responsabilidad de supervisar y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de supervisión, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

El reproche fiscal se encuentra sustentado ya que en cabeza de YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, quien actuó como supervisora, se encontraba la representación del Municipio y por tanto tenían a su cargo la salvaguarda de los recursos públicos invertidos con el fin de que estos cumplieran el cometido estatal encomendado.

La conducta mencionada contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De otra parte la mencionada conducta encuadra en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tal como se hizo alusión en líneas precedentes consistente en: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es con secuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Adicionalmente la Ley 1474 de 2011 establece en el artículo 118 que se presume la culpa grave: (...) c) *Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas*. Para el presente caso se tiene que se omitió las obligaciones propias de supervisión al no revisar la adecuada prestación del servicio educativo del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141040 del 3 de marzo de 2014, pues de haberse realizado se hubiera detectado que se estaba pagando por cupos a los cuales no se les prestó el servicio educativo y se hubiera evitado el presunto daño patrimonial detectado en la presente investigación.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, Secretaria de Educación del Distrito y Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones como Secretaria de Educación del Distrito y Supervisora del Contrato en comento, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, en ejercicio de la función pública, con funciones asignadas de supervisor para la época de los hechos, que le determinaban la responsabilidad frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de seguimiento y verificación en la contratación de ampliación de cobertura, surge en virtud de ejercer un inadecuado proceso de supervisión, pues certificó como Supervisor que el Contrato se había ejecutado a entera satisfacción de las partes, lo cual incidió de manera directa en la pérdida de recursos, pues conforme con dicha aprobación avaló el pago del Contrato, sin advertir que se habían cancelado unos recursos por concepto de alumnos inexistente, configurándose de esta manera, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, una gestión que no corresponde al cumplimiento de los cometidos estatales, razón por la cual se le llama a responder a título de culpa grave en cuantía no indexada de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000).

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL SONIA SEGURA SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No.

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 37 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

66.744.423, en calidad de Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, es necesario precisar lo siguiente:

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.

Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 38 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

*“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
(...)”*

9. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”

- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“Artículo 26. Del Principio De Responsabilidad. En virtud de este principio:

*1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
(...)”*

*2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.
(...)”*

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Sea lo primero indicar que el supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (...)”

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

En atención a lo anterior, resulta claro que el interventor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la interventoría, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011 establece como falta: *“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”*.

Como se puede observar, por parte de la Interventora, no hubo el mínimo cuidado, o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya

que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias de la vigilancia y control de la correcta iniciación y ejecución que debía realizar el Interventor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas para la interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

En su condición de Interventora del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución del mismo. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la interventoría, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

La conducta mencionada contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De otra parte la mencionada conducta encuadra en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tal como se hizo alusión en líneas precedentes consistente en: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es con secuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Adicionalmente la Ley 1474 de 2011 establece en el artículo 118 que se presume la culpa grave: (...) c) *Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas*. Para el presente caso se tiene que se omitió las obligaciones propias de supervisión al no revisar la adecuada prestación del servicio educativo del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014, pues de haberse realizado se hubiera detectado que se estaba pagando por cupos a los cuales no se les prestó el servicio educativo y se hubiera evitado el presunto daño patrimonial detectado en la presente investigación.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo de SONIA SEGURA SANCHEZ, se encontraba una responsabilidad de realizar seguimiento y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de vigilancia, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por SONIA SEGURA SANCHEZ,

Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones como Interventora del Contrato en comento, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, en ejercicio de la función pública, con funciones asignadas de supervisor para la época de los hechos, que le determinaban la responsabilidad frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de seguimiento y verificación en la contratación de ampliación de cobertura, surge en virtud de ejercer un inadecuado proceso de supervisión, pues certificó como Supervisor que el Contrato se había ejecutado a entera satisfacción de las partes, lo cual incidió de manera directa en la pérdida de recursos, pues conforme con dicha aprobación avaló el pago del Contrato, sin advertir que se había cancelado unos recursos por concepto de alumnos inexistente, configurándose de esta manera, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, una gestión que no corresponde al cumplimiento de los cometidos estatales, razón por la cual se le llama a responder a título de culpa grave en cuantía no indexada de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000), valor que contiene la totalidad de los recursos desembolsados para la ejecución del Contrato objeto de reproche.

- **ANALISIS DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “INSTEP”**, identificado con NIT. 835.001.684-1, representado legalmente por Elizabeth Riascos Riascos, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.777.019, Contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, quien a su vez realiza el convenio No. 011-14 con la institución privada, CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, identificado con NIT. 31.589.962-1, representado legalmente por Paola Andrea Molina Angulo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, para que preste los Servicios Educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014, es necesario precisar lo siguiente:

El Instituto Tecnológico Panamericano “INSTEP”, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, y a su vez realiza el Convenio No. 011-14 con varias subsedes entre ellas el Centro Educativo Abeja Maya, por lo tanto tenemos que como extremo contractual ambos son beneficiarios de unos recursos públicos con ocasión de una interrelación con la actividad administrativa del Estado, y se convierten en colaboradores de la función desempañada por este, a través de un Contrato, con lo cual se someten a las reglas de derecho público para la contratación estatal y las finalidades constitucionales de sus recursos propendiendo por el beneficio general y social, principio que en la Ley 80 de 1993 adquiere un papel central, pues el Estado garantiza a los particulares su beneficio económico o utilidad al momento de contratar, pero conforme a una carga social y destinación concreta de los recursos públicos, y también dentro de la etapa contractual presenta una posición a la administración que somete a su consideración y aprobación bajo los principios o condicionamientos que la misma le imponga, como precio, plazo y demás que son objeto del ámbito contractual, pero no se permite bajo ninguna circunstancia provecho indebido o abusivo de la relación contractual que llegue a atentar o menoscabar los recursos públicos.

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma

sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia. Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

(...)

9. *Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

- 1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”*
- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:

- 1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*
(...)
- 2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.*
(...)
- 4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”*

“Artículo 5o. De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:

- 1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.*
(...).
- 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse.*
(...).
- 4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.”*

Las citadas normas nos conducen a establecer de forma clara e inequívoca que el Contratista además de ser un tercero que entra a cumplir con la ejecución contractual en una Entidad, se convierte en un colaborador del Estado en su función social, generando a este una obligación universal de lograr el cometido que es, el generar un beneficio social a través del contrato estatal celebrado, por consiguiente; debe actuar de la mejor manera para el cumplimiento del logro, de tal suerte que analizadas las pruebas documentales y técnicas que se aportaron al Expediente, podemos advertir que el Instituto Tecnológico Panamericano - INSTEP no ejecutó las actividades para las que estaba obligado en virtud de la relación contractual, derivadas del mencionado Contrato, de acuerdo con la cláusula sexta se obligaba a:

- a. Prestar el servicio educativo Formal a los estudiantes beneficiarios del programa de*

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 44 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

Ampliación de Cobertura reportaos en el SIMAT que pertenecen al grupo de población clasificada como estrato socioeconómicos 1 y 2 y niveles 1, 2 y 3 del SISBEN del Distrito de Buenaventura y que están relacionados en el Anexo 1 de este Contrato, de conformidad con las directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital, utilizando el establecimiento educativo a nombre del cual contrata en su calidad de representante legal. b. – Asumir con los valores del precio del contrato, los costos de los elementos que hacen parte de la Canasta Educativa ofrecida. c. – Reportar al Distrito de Buenaventura por medio escrito y en el Aplicativo SIMAT, los retiros de los alumnos beneficiarios indicando el motivo de los mismos. d.- Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el Servicio Educativo. e. - permitir el ejercicio de las labores de seguimiento, supervisión, control y vigilancia que adopte el Distrito de Buenaventura. f. – aportar oportunamente la información o documentación que el Distrito de Buenaventura el Ministerio de Educación Nacional, el Director de Zona Educativa o la Interventoría del Programa designada por el CONTRATANTE, requieran para evaluar la buena ejecución del contrato. g. – Presentar la garantía única exigida a través de póliza de seguro timada en entidad aseguradora legalmente constituida. h. – inhibirse de adelantar cobros adicionales o pactar con los padres de familia o representantes de los educandos toda clase de cobros por la prestación del Servicio Educativo que ha sido contratado durante la vigencia del Periodo Lectivo 2014. i.- Mantener su autonomía e independencia en la ejecución del objeto del contrato y la relación con quienes decida contratar para la ejecución del mismo. j.- Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los beneficiarios del subsidio en los establecimientos de servicios educativos durante el calendario escolar. k.- Aportar oportunamente la información o documentación que el contratante requiera con relación el lapso transcurrido de ejecución efectiva del servicio educativo prestado. l.- liberar al Distrito de Buenaventura – Secretaría de Educación- de responsabilidad por hechos o acciones, operaciones u omisiones que con ocasión del servicio público educativo prestado ejecuten o hayan ejecutado, tanto el contratista como sus dependientes y relacionados, así como garantizar la inexistencia de cualquier vínculo jurídico contractual y/o laboral entre el contratista y /o el personal que hubiese utilizado para prestación del servicio que hoy se transa. m.- Garantizar que los alumnos beneficiarios del subsidio y atendidos por el marco del proyecto de ampliación de cobertura mediante la contratación del servicio educativo con entidades no estatales del Distrito de Buenaventura, puedan continuar recibiendo la atención educativa hasta la terminación del año lectivo, en solución de continuidad y logar su promoción de conformidad con la normatividad vigente. n.- Cancelar cumplidamente al personal docente, directivo y a las instituciones educativas con las cuales el contratista haya celebrado convenios privados de asociación para la prestación del servicio educativo. o.- Rendir oportunamente los informes requeridos por la Secretaría de Educación Distrital, el interventor y/o el Ministerio de Educación Nacional. p.- Adquirir en cualquier compañía aseguradora la póliza de seguro estudiantil de los 1.402 alumnos Beneficiarios que se encuentran relacionados en el documento de nominado “Anexo 1”. q.- Desarrollar los programas curriculares y planes de estudio de los grados y niveles determinados en el Proyecto Educativo Institucional o el Proyecto Educativo Comunitario de cada establecimiento educativo, con el fin de prestar adecuadamente el servicio educativo. r- Establece mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los beneficiarios en los establecimientos educativos, durante todo el año lectivo. s.- Promover a los alumnos de acuerdo con los dispuesto en la ley. t. -Reportar a la Secretaría de Educación y/o al supervisor del contrato, los soportes de inasistencia de los estudiantes beneficiarios. La no presentación del reporte conlleva la pérdida del cupo escolar. u. – El contratista no podrá asignar los cupos que se generen por el retiro de estudiantes Beneficiarios o graduados. v.- Cumplir con los planes de mejoramiento que arrojen las visitas de seguimiento por parte de la entidad territorial y/o la interventoría, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato y generar la terminación inmediata del mismo. w. – Todas las demás obligaciones necesarias para la integral ejecución del objeto contratado.

Obligaciones que la Entidad contratante incumplió.

Es menester precisar en que los contratistas del Estado son sujetos de control fiscal cuando quiera que manejan bienes o fondos públicos y tal gestión se materializa en el hecho de que el contratista al entrar a negociar con la administración, los términos y obligaciones del contrato y comprometerse específicamente a cumplir con lo

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 45 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

pactado, ejerce actos de conexidad próxima con el ejercicio de la gestión fiscal, máxime si se tiene en cuenta que se le entregaron unos recursos en calidad de pagos, que son de carácter público, razón por la cual, su manejo y custodia debe estar inmerso dentro de las obligaciones de un verdadero gestor fiscal, ya que son unos recursos públicos que han sido destinados para cumplir un fin social y como tal le asiste el deber de actuar con lealtad y honestidad a lo largo de toda su participación como Contratista, observando los principios de transparencia, economía y responsabilidad en aras de salvaguardar los recursos del Estado.

La conducta del Contratista se materializa al momento de celebrar el Contrato estatal y de recibir unos recursos en calidad de pago, los cuales, si no son invertidos en su totalidad en el objeto contractual da lugar a derivarle responsabilidad fiscal, al apropiarse de unos recursos públicos que legalmente no le pertenecían por cuanto no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual.

Con su conducta el Contratista, incurrió en una manifiesta violación a los deberes contractuales estipulados expresamente en las Obligaciones del Contratista, así como los principios y deberes de los contratistas consagrados en el Estatuto de la contratación estatal Ley 80 de 1993 que prevé como fin de la contratación estatal respecto de los particulares:

Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal. “(...) Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Artículo 5. consagra los derechos y deberes de los contratistas. “Para la realización de los fines de que trata el artículo 3, de esta ley, los contratistas: (...) 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse. (...) 4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. (...)”

De acuerdo con el material probatorio obrante en el Expediente, el INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO – INSTEP, y el Centro Educativo Abeja Maya, faltaron a su deber de obrar con lealtad respecto de la Entidad a la cual prestaron sus servicios como contratistas, lo que generó un provecho económico injustificado para sí, un menoscabo económico del Estado. Se considera pues, una actitud antieconómica en contra de los fines del Estado.

Con dicha conducta transgredió toda la normatividad tendiente al adecuado manejo de los recursos públicos y también las propias de la administración y la moralidad pública.

De acuerdo con lo anterior y confirmada la relación contractual entre el DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA y el INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO – INSTEP Contratista, este Despacho considera que, para el INSTEP, se configura el título de culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone: “Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.”

En su calidad de Contratista es responsable a título de culpa grave, por el detrimento patrimonial causado a el INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO – INSTEP, por haber recibido a satisfacción el pago del mismo pese a no haber

realizado la debida ejecución del contrato, puesto que desde que se inició la ejecución del contrato no ha justificado la inversión de estos recursos en las actividades que se contrataron, por consiguiente se le imputará en su contra responsabilidad fiscal, lo anterior teniendo en cuenta el incumplimiento del Contrato y de la normatividad en materia contractual.

La conducta desplegada por el Contratista contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil: *“La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...”*

De igual manera la conducta mencionada encaja en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, que preceptúa: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el Contratista INSTITUTO TECNOLÓGICO PANAMERICANO – INSTEP, y por extensión el Centro Educativo Abeja Maya, incurrieron en una manifiesta violación a los deberes contractuales estipulados expresamente en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, así como los deberes de los contratistas consagrados en el Estatuto de la contratación estatal Ley 80 de 1993, por lo cual son presuntos responsables fiscales por su conducta gravemente culposa en su condición de Contratistas, al contravenir los términos pactados así como las obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal mencionadas, a las cuales se sustrajeron por haber incurrido en apropiación de recursos públicos no ejecutados, conducta ajena a las finalidades del servicio del Estado que dio lugar al detrimento patrimonial del Estado Colombiano representado en los recursos recibidos, sujetos a devolución en el evento de no ser ejecutados.

Ahora bien, se debe advertir que los pagos realizados en el marco de una relación contractual son una retribución de una obligación cumplida y teniendo en cuenta que en el presente asunto el Contratista recibió el pago de recursos por cupos a los que no se les prestó el servicio, constituye una administración fiscal irregular y antieconómica, en el ámbito de la responsabilidad fiscal, tal como lo dispone el artículo 4 Ley 610 de 2000.

En este orden de ideas, siendo la responsabilidad legal y contractual del INSTITUTO TECNOLÓGICO PANAMERICANO – INSTEP, el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, tal como estaba estipulado en el Contrato, en consecuencia, se le imputara responsabilidad fiscal a título de culpa grave, materializándose el detrimento fiscal en cuantía no indexada de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000) sin indexar, valor que corresponde a los recursos desembolsados por la Administración municipal por concepto del pago de cupos no atendidos.

Por lo anterior, esta Colegiatura, proferirá imputación de responsabilidad fiscal en contra de:

- BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014.

- YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014.
- SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014.
- INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “INSTEP”, identificado con NIT. 835.001.684-1, representado legalmente por Elizabeth Riascos Riascos, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.777.019, Contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, quien a su vez mediante convenio No. 011-14 contrata a la institución privada CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA.
- CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, identificado con NIT. 31.589.962-1, representado legalmente por Paola Andrea Molina Angulo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, para que preste los Servicios Educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014.

El cual se dispondrá en la parte resolutive de la presente providencia, respecto del detrimento causado al DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, por el valor parcial de las actividades contratadas y las cuales si bien es cierto no fueron ejecutadas en su totalidad, no existe evidencia que demuestre su ejecución conforme a las razones expuestas por un valor correspondiente de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000). - Sin indexar.

NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y LA CONDUCTA

El nexo causal entre la conducta del INSTITUTO TECNOLÓGICO PANAMERICANO - INSTEP y el CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA y el detrimento ocasionado al Distrito Especial de Buenaventura es evidente pues como Contratistas en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, no cumplieron con las obligaciones contractuales, prestando la atención a estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, con instituciones del sector privado inscritas en el banco de oferentes del Distrito Especial de Buenaventura, para la vigencia lectiva 2014, por lo que se demuestra la relación causa efecto entre la conducta y el resultado de esta, es decir, el detrimento que se produjo al erario del Distrito Especial de Buenaventura, está debidamente probada la no ejecución del objeto contractual.

Respecto a los presuntos responsables BARTOLO VALENCIA RAMOS, YENNY MARIA ANGULO QUINTANA y SONIA SEGURA SANCHEZ, se establece el nexo causal entre su conducta y el daño, en el sentido que eran las personas llamadas a realizar seguimiento, control, verificación y exigencia del cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, sin embargo, al no cumplir cabalmente con sus funciones permitieron que se ocasionara el detrimento del Distrito Especial de Buenaventura, al no haberse ejecutado totalmente el objeto contractual; no cumplir con sus funciones respecto a este Contrato de Prestación de Servicios Educativos, permitió que el Contratista incumpliera con la ejecución de la totalidad del objeto contratado sin ninguna justificación.

La revisión de los documentos mencionados conlleva a que, de la valoración integral de las pruebas a partir del Auto No. 510 del 20 de agosto del 2019 y los informes técnicos practicados, se entienda que, el reproche fiscal debe ser abordado, en la calificación de las condiciones materiales que dieron lugar al no cumplimiento total del objeto contractual.

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 48 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

Por lo anterior, esta Colegiatura, proferirá imputación de responsabilidad fiscal contra BARTOLO VALENCIA RAMOS, YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, SONIA SEGURA SANCHEZ, INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO – INSTEP y el CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA.

Así las cosas, al confluir en el presente caso los requisitos señalados en el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, por estar objetivamente demostrado el daño al patrimonio económico del Estado y existir medios probatorios que comprometen su responsabilidad fiscal, Los Suscritos Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, imputarán responsabilidad fiscal en forma solidaria en cuantía, sin indexar, de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000).

DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE


De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, fue vinculada en calidad de Tercero Civilmente Responsable Fiscal al presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, la aseguradora **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al expedir una renovación del Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial No. 300010, Riesgo 1. Objeto del Seguro: Manejo, expedida el 27 de enero de 2014 con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero del 2015, tomador Distrito Especial de Buenaventura, identificado con el NIT 890.399.045-3, asegurado Bartolo Valencia Ramos identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, por el riesgo amparado: Fallo con Responsabilidad Fiscal, por un valor asegurado de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000). La comunicación de vinculación al Representante Legal de la aseguradora se efectuó mediante Oficio con radicado No. 2019EE0104705 del 26 de agosto del 2019.

Respecto a esta Póliza se debe mantener su vinculación al presente Proceso, teniendo en cuenta que hubo incumplimiento y omisiones en las funciones a cargo los funcionarios vinculados al Proceso del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, que a la postre desencadenó en un daño, por lo que están llamadas a responder por el detrimento ocasionado. Es esta póliza la que brinda el respaldo para que se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, debe ser ella quien se haga responsable de los pagos a realizar, es quien minimiza el impacto en caso de que el contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en el contrato.

INSTANCIA DEL PROCESO

El Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 contempla: *“**Instancias.** El proceso de responsabilidad será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o **de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso**, sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada”*. Negrillas y subrayas fuera de texto.

De acuerdo con la Resolución del 14 de febrero 2015, certificación expedida por el Distrito Especial de Buenaventura, en la que se indica que para el año 2015 la menor cuantía para contratar estaba fijada en \$ 418.827.500. Considerando que la cuantía sin indexar del daño patrimonial asciende a UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.710.000), sin indexar, puede determinarse que el proceso de responsabilidad fiscal que nos ocupa se tramitará en única instancia, toda vez que el valor del detrimento patrimonial corresponde a valor que no supera la menor

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 49 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

cuantía para contratación del Distrito Especial de Buenaventura–Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura para la vigencia 2014.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **LOS DIRECTIVOS COLEGIADOS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,**

RESUELVEN

PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL de forma solidaria, a título de culpa grave, dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2019-00730, que se adelanta con ocasión del daño patrimonial causado a los intereses patrimoniales del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, por la suma no indexada de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 1.710.000), según se expuso en la parte motiva de este proveído, en contra de:

- BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014.
- YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014.
- SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014.
- INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “*INSTEP*”, identificado con NIT. 835.001.684-1, representado legalmente por Elizabeth Riascos Riascos, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.777.019, Contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141005 del 3 de marzo de 2014, quien a su vez mediante convenio No. 011-14 contrata a la institución privada Centro Educativo Abeja Maya.
- CENTRO EDUCATIVO ABEJA MAYA, identificado con NIT. 31.589.962-1, representado legalmente por Paola Andrea Molina Angulo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, para que preste los Servicios Educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014.

SEGUNDO: MANTENER en calidad de terceros civilmente responsable a **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al expedir una renovación del Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial No. 300010, Riesgo 1. Objeto del Seguro: Manejo, expedida el 27 de enero de 2014 con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero del 2015, tomador Distrito Especial de Buenaventura, identificado con el Nit. No. 890.399.045-3, asegurado Bartolo Valencia Ramos identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, por el riesgo amparado: Fallo con Responsabilidad Fiscal, por un valor asegurado de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TRAMITAR en única instancia el Proceso Ordinario de Responsabilidad No. PRF-2019-00730, en atención al artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 y lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 50 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente providencia a los implicados y a sus apoderados de oficio, quienes se pueden localizar en las siguientes direcciones:

- BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, notificar en el Cosmos Pacifico Hotel Calle 3 No. 1 A – 57 Habitación 1605; y a su apoderada de oficio LLERLY ASNEILY NOGUERA BURBANO identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.088.156.007, en el correo electrónico llerly.noguera1@u.icesi.edu.co .
- YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, notificar en COJAM - Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí – ubicado en Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, donde se encuentra recluida y a su apoderado de oficio LAURA CATALINA ANDRADE CORREA identificada con cedula de ciudadanía 1.005.890.703 de Cali., en el correo electrónico laura.andrade1@u.icesi.edu.co.
- SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, notificar en el correo electrónico sonia_s_s@hotmail.com.
- INSTITUTO TECNOLOGICO PANAMERICANO “*INSTEP*”, identificado con NIT. 835.001.684-1, representado legalmente por Elizabeth Riascos Riascos, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.111.777.019, notificar en los correos electrónicos instep96@hotmail.com y segundoedgarangulo@hotmail.com y a su apoderado de oficio MIGUEL ANGEL CARABALI MARQUEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, en el correo electrónico miguel.carabali1@u.icesi.edu.co.
- INSTITUCION EDUCATIVA ABEJA MAYA, identificada con el NIT. 31.589.962-1, representado legalmente por Paola Andrea Molina Angulo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, notificar en los correos electrónicos instep96@hotmail.com y segundoedgarangulo@hotmail.com y a su apoderado de oficio MIGUEL ANGEL CARABALI MARQUEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 31.589.962, en el correo electrónico miguel.carabali1@u.icesi.edu.co.

QUINTO: TRASLADO. De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 610 de 2000, surtida la notificación personal, se hace saber a cada uno de los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados de oficio y de confianza y al apoderado del tercero civilmente responsable, que disponen de un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para presentar los Argumentos de Defensa frente a la imputación efectuada, así como para solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer, los cuales habrán de ser radicados en la oficina de correspondencia de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, o a través de los correos electrónicos responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co, sandra.barcos@contraloria.gov.co advirtiéndole que durante dicho término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría Común ubicada en la Calle 23 A Norte No. 3-95 Edificio San Paolo Barrio Versalles, de la ciudad de Cali-Valle del Cauca.

SEXTO: SIN RECURSOS. Contra el presente auto no proceden recursos.

SEPTIMO. Por Secretaría Común, líbrense las citaciones y notificaciones de rigor para el efectivo cumplimiento de lo aquí ordenado.

OCTAVO: Efectuar en los aplicativos institucionales las anotaciones que correspondan a la presente decisión.

 CONTRALORÍA General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 51 de 51
AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00730	

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



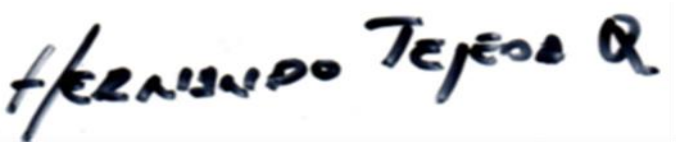
GUILLERMO ELIÉCER LÓPEZ PERDOMO
Contralor Provincial – Directivo Ponente



SANDRA PATRICIA RIVERA VELASCO
Contralora Provincial




JAIRO MANUEL ESTRADA MOSQUERA
Contralor Provincial



EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO
Gerente Departamental
Presidente de la Colegiatura

Elaboró: Sandra Patricia Barcos García 
Profesional Sustanciador

Revisó. Adriana Franco Londoño 
Coordinador de gestión

Aprobado. Sesión extraordinaria Acta No. 76 del Comité de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle.
Fecha: septiembre 26 del 2024